

# Cuadernos Deusto de Derechos Humanos

Núm. 91

## El genocidio de los tutsi en Ruanda

Filip Reyntjens



**Deusto**Digital

Instituto de Derechos Humanos

*Pedro Arrupe*

Giza Eskubideen Institutua



# **Cuadernos Deusto de Derechos Humanos**



# **Cuadernos Deusto de Derechos Humanos**

**Núm. 91**

El genocidio de los tutsi  
en Ruanda

**Filip Reyntjens**

Bilbao  
Universidad de Deusto  
2018

#### **CONSEJO DE REDACCIÓN**

**Cristina de la Cruz**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.  
**Trinidad L. Vicente**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.  
**Encarnación La Spina**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.  
**Felipe Gómez Isa**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.

#### **CONSEJO EDITORIAL**

**Anja Mihr**, Investigadora del Human Rights Center de la Universidad de Utrecht, Holanda.  
**Antoni Blanc Altemir**, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Lleida.  
**Bartolomé Clavero**, Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas.  
**Carlos Villán Durán**, Presidente de la Asociación Española para la Promoción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
**Carmen Márquez**, Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Sevilla.  
**Cristina Churrua**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.  
**Eduardo J. Ruiz Vieytes**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.  
**Fernando Fantova**, consultor en temas relacionados con los servicios sociales, Bilbao.  
**Francisco López Bárcenas**, Academia Mexicana de Derechos Humanos, México.  
**Gaby Oré Aguilar**, consultora internacional en el campo de los derechos humanos y el género y miembro de Human Rights Ahead, Madrid.  
**Gloria Ramírez**, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México.  
**Gorka Urrutia**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.  
**Jaume Saura**, Presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, Barcelona.  
**Joana Abrisketa**, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.  
**Jordi Bonet**, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona.  
**José Aylwin**, Director del Observatorio de Derechos Ciudadanos, Temuco, Chile.  
**José Luis Gómez del Prado**, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de Mercenarios, Ginebra, Suiza.  
**José Manuel Pureza**, Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal.  
**Judith Salgado**, Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.  
**Koen de Feyter**, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Amberes, Bélgica.  
**Manuela Mesa**, Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ, Madrid.  
**Noé Cornago**, Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa.  
**Pablo de Greiff**, International Center on Transnational Justice, New York.  
**Víctor Toledo Llancaqueo**, Centro de Políticas Públicas, Universidad ARCIS, Santiago, Chile.  
**Vidal Martín**, investigador de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE, Madrid.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org) <<http://www.cedro.org>>) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Original: *Le génocide des tutsi au Rwanda*, PUF, Que sais-je?, 2017. Traducción: Ramón Arozarena.

© Publicaciones de la Universidad de Deusto  
Apartado 1 - 48080 Bilbao  
e-mail: [publicaciones@deusto.es](mailto:publicaciones@deusto.es)  
ISBN: 978-84-1325-026-7

# Índice

Nota para la edición española . . . . .	9
Prólogo . . . . .	11
Introducción . . . . .	13
Capítulo 1. <b>Antecedentes</b> . . . . .	15
1. Etnias y etnicidad . . . . .	15
2. La revolución de 1959-1961 . . . . .	19
3. La 1.ª y 2.ª Repúblicas . . . . .	21
Capítulo 2. <b>Transición política y guerra civil</b> . . . . .	27
1. La «democratización» . . . . .	27
2. El ataque del FPR y la guerra civil . . . . .	29
3. El acuerdo de Arusha y su hundimiento . . . . .	31
4. Las estrategias de la tensión . . . . .	34
Capítulo 3. <b>El genocidio</b> . . . . .	37
1. Preparativos . . . . .	37
2. Puesta en práctica . . . . .	39
3. Crímenes cometidos por el FPR . . . . .	56
4. Responsabilidades . . . . .	59
Capítulo 4. <b>Las secuelas</b> . . . . .	63
1. Tratamiento judicial . . . . .	63
2. La gran guerra africana . . . . .	72
3. Verdad histórica y relaciones étnicas . . . . .	74
Conclusión . . . . .	77
Abreviaturas . . . . .	81
Cronología . . . . .	83
Bibliografía . . . . .	85





## Nota para la edición española

Este pequeño libro es la traducción de *Le génocide des Tutsi au Rwanda*, aparecido en 2017 en la colección *Que sais-je?* de Presses Universitaires de France. Los libros de esta colección, de exactamente 127 páginas, ofrecen informaciones sobre muy diversos temas de una manera científica y al mismo tiempo accesible para un amplio público. El espacio limitado impide al autor entrar en detalles y de este modo proporciona al lector un acceso sinóptico y rápido a informaciones y análisis.

Esta versión española es idéntica al original publicado en Francia; no ha sido, por lo tanto, puesta al día. No obstante, deben mencionarse dos evoluciones. Por un lado, el libro de Judi Rever *In Praise of Blood. The Crimes of the Rwandan Patriotic Front* (Toronto, Random House Canada, 2018) ofrece numerosos detalles de los crímenes cometidos por el Frente Patriótico Ruandés, hoy en el poder, y muestra incluso que ha cometido un genocidio contra los Hutu. Por otro lado, la instrucción llevada a cabo en Francia sobre el atentado contra el avión presidencial, acontecimiento desencadenante del genocidio contra los tutsi, ha sido clausurada en diciembre de 2018. A la vez que los jueces instructores ponen de relieve numerosas indicaciones que señalan al FPR como el autor de este acto, estiman que las pruebas no son suficientemente concluyentes para llevar a los sospechosos ante la Audiencia.

Ramón Arozarena ha traducido este texto. Le agradezco sinceramente su minucioso trabajo.

Filip Reynjens



## Prólogo

«Cuadernos de Deusto de Derechos humanos», dedica hoy uno de sus números a los terribles hechos —genocidio— de abril/julio de 1994 en Ruanda, hace ya 25 años. Podría parecer que se trata de una tragedia ya abundantemente estudiada y analizada. Sin embargo, sigue siendo un tema complejo y generador, sobre todo en Francia y Bélgica, de enconadas y agrias controversias y polémicas; el eco de las mismas solo ha llegado entre nosotros a círculos minoritarios. Más allá de los reportajes periodísticos publicados en su día, que sacudieron y conmovieron a la opinión pública, no ha existido a lo largo de estos años, salvo alguna excepción, obras en castellano al respecto.

Este cuaderno, «El genocidio de los tutsi en Ruanda», es la traducción de un librito que la prestigiosa editorial francesa *Presses Universitaires de France* (PUF) encargó que escribiera el Profesor belga Filip Reyntjens para su colección *QUE SAIS-JE? (¿Qué sé yo de...?)*. Se trata de una colección —que ha publicado varios miles de libros de no más de 130 páginas— que logra aunar el rigor científico con la divulgación. Para cualquier investigador, recibir un encargo de *PUF-Que sais-je?* es evidentemente un honor. Filip Reyntjens, reconocido especialista de la región de Los Grandes Lagos de África, es profesor de Instituto de Política y de Gestión del Desarrollo (IOB) de la Universidad de Amberes. Es autor de numerosos libros sobre Ruanda y la región, como *África de los Grandes Lagos en crisis. Ruanda y Burundi 1988-1994* (Karthala, 1994); *Tres días que dieron un vuelco a la historia* (L'Harmattan, 1995); *La guerra de los Grandes Lagos* (L'Harmattan, 1999); *Los riesgos del oficio. Tres décadas como investigador/factor en Ruanda y Burundi* (L'Harmattan, 2009); *La gran guerra africana*, (Les BellesLettres, 2012); *Gobernar después del genocidio* (Les Belles Lettres 2014). Ha coordinado la edición del *Anuario de África de los Grandes Lagos*, hasta el año pasado, además de redactar desde 1996 el capítulo dedicado anualmente a la crónica política de Ruanda. Durante varios años fue un experto consultado regularmente por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) de Arusha, mandatado por las Naciones Unidas para entender y juzgar

sobre los crímenes cometidos en Ruanda de enero a diciembre de 1994. Tribunal, como se sabe, que ha juzgado y condenado a los considerados máximos responsables hutu del genocidio de los tutsi, pero que rehusó, por presiones del gobierno de Kigali, juzgar los responsables de crímenes cometidos también por el Frente Patriótico Ruandés (FPR, hoy en el poder) en el periodo asignado por el mandato de la ONU. Esta impunidad fue denunciada por F. Reyntjens e hizo que renunciara a su condición de experto ante el TPIR. Decisión que, unida a muy aceradas críticas de nuestro autor al régimen autoritario instalado en Ruanda tras el genocidio de los tutsi, le han acarreado el «honor» de ser considerado persona «non-grata» por parte del Ruanda oficial y sus numerosos aduladores.

Filip Reyntjens se enfrenta (y destruye ciertamente) al relato oficial de la historia de Ruanda (*en esquemático resumen: 1) Ruanda era un país armónica y pacíficamente estructurado, 2) La colonización alemana y belga y la labor de los misioneros inocularon en la sociedad ruandesa el veneno del etnicio smo y del enfrentamiento entre los grupos humanos, destruyendo la armonía precolonial y sentando las bases del genocidio anti-tutsi de 1994; 3) el FPR, con su victoria, además de terminar con el genocidio, ha restablecido la paz primigenia*), que extiende e impone el poder para legitimar su férreo control sobre los/as ciudadanos/as ruandeses. Todos sabemos que el llamado «control del relato» es una poderosa arma legitimadora de todo poder. Pero los análisis y reflexiones de Reyntjens nos acercan a la verdad. Una verdad, cuyo reconocimiento, compartido por todos/as los/as ruandeses/as, podría ser la base para una indispensable reconciliación de una sociedad obligada al silencio y a la resignación; de otro modo, la tergiversación y manipulación del pasado se convierten en semillas de inevitables conflictos futuros.

Esta pequeña obra que publican los Cuadernos de Deusto de Derechos Humanos es una síntesis rigurosa y a la vez accesible de lo que sucedió en aquellos meses trágicos, de abril a julio de 1994, en Ruanda, precedida por breves páginas que la enmarcan en unos antecedentes y seguida por la enumeración, también breve, de graves secuelas. No pretende, dado el objetivo fundamental asignado al autor por la editorial, abordar en su totalidad la detallada complejidad de la situación actual o de la evolución del régimen ruandés a lo largo de estos años; aporta las pinceladas indispensables que pueden ayudar a comprender la complejidad de lo ocurrido en 1994, huyendo de simplismos que reducen los conflictos a una pugna exclusiva entre buenos y malos; a la vez que introduce elementos críticos respecto a la imagen que con frecuencia nos ofrecen los medios de comunicación de la realidad actual del régimen ruandés.

*Ramón Arozarena*  
Pamplona, febrero de 2018

# Introducción

El exterminio de los tutsi ruandeses es calificado comúnmente como «el último genocidio del siglo xx», tras el que resonó con fuerza y claridad el grito: «¡Nunca más!». Sin embargo, los primeros genocidios del siglo xxi están ya detrás de nosotros o se están produciendo ante nuestros ojos: los tamiles de Sri Lanka en 2009, hoy los chiitas, sunitas y yezidies en Oriente Medio, que han sido blanco de violencias genocidas. Como muestra el caso de los chiitas y sunitas, las víctimas son a veces autores de crímenes e inversamente.

Si bien se han perpetrado en África y en los Grandes Lagos otros genocidios, el genocidio de 1994 ha sido excepcional por su envergadura, rapidez y por su modo operatorio: más de medio millón de personas exterminadas en cien días, matadas generalmente por medio de armas rudimentarias utilizadas por un gran número de autores del crimen. Según las estadísticas de la justicia ruandesa, la relación autor-víctima es de en torno a dos por uno, lo que justifica la designación de «genocidio popular».

El presente ensayo trata de captar los resortes de esta tragedia. Una amplia parte está consagrada a los antecedentes, lejanos y más inmediatos, indispensables para comprender las dinámicas que se pusieron en práctica. El desarrollo del genocidio mismo es descrito en sus grandes líneas, pero los detalles serán voluntariamente desatendidos; han sido estudiados en numerosos trabajos consagrados a este crimen o a determinados aspectos del mismo. Nuestro análisis no concluye en el momento del fin del genocidio, sino que aborda igualmente sus secuelas. La tragedia de 1994, en efecto, no es el fin de esta historia, ya que, por muy grave que pueda parecer, solo constituye una etapa de la misma. Sigue presente en la región de los Grandes Lagos y muy especialmente en Ruanda, donde uno vuelve a encontrar la violencia estructural que había precedido al genocidio y que podría, en el futuro, transformarse nuevamente en violencia aguda.

El genocidio no solo pertenece a la historia. Sigue constituyendo un envite contemporáneo tanto en Ruanda como en otras zonas de la región y en el mundo, especialmente en Francia. La polarización permanece intacta, los debates, intensos, la semántica, a veces, violenta. Esperamos que este libro ofrezca claves de lectura que permitan poner en evidencia hechos comúnmente aceptados, capaces de sustentar un análisis y una interpretación más sobrios de este drama.

## Capítulo 1

# Antecedentes

### 1. Etnias y etnicidad

Para que exista genocidio, es preciso que exista un grupo, por ejemplo étnico, que sea víctima. En efecto, la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio de 1948 dice que el término «se aplica a cualquiera de los actos cometidos con intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en cuanto tal». ¿Constituyen los tutsi un grupo étnico? Las definiciones de etnia propuestas por los grandes diccionarios son similares: «agrupamiento orgánico de individuos con una misma cultura y hablantes de una misma lengua» (Larousse); «conjunto de individuos a los que les une cierto número de características de civilización, concretamente la comunidad de lengua y de cultura» (Robert). Tras hacer un recorrido por las definiciones propuestas por los investigadores, Jean-Loup Amselle llega a criterios comunes análogos: «la lengua, un espacio, unas costumbres y valores, un nombre, una misma descendencia y la conciencia que tienen los actores sociales de pertenecer un mismo grupo<sup>1</sup>». Sobre estas bases —salvo el criterio último citado por Amselle— hutu, tutsi y twa de Ruanda no son etnias, dado que tienen en común la mayor parte de esas características. Sus portavoces políticos, al menos los más radicales, proponen, sin embargo, puntos de vista totalmente divergentes. De manera estereotipada, el punto de vista «tutsi»<sup>2</sup> avanza que «esos tres

---

<sup>1</sup> J.-L. Amselle, «Ethnies et Espaces. Pour une anthropologie topologique », in J.-L. Amselle, E. M'Bokolo (dir.), *Au cœur de l'ethnie. Ethnies, tribalisme et état en Afrique*, Paris, La Découverte, 1985, p.18.

<sup>2</sup> La utilización en este libro de expresiones como la «opinión hutu» o la «opinión tutsi» comporta evidentemente una generalización que oscurece el hecho de que las ca-

grupos constituyen una sola y misma etnia y no tres etnias diferentes<sup>3</sup>. Es, igualmente, el punto de vista del poder actual: «Antes de la llegada de los europeos, los ruandeses se entendían entre ellos, el país se caracterizaba por su unidad<sup>4</sup>.» De manera también estereotipada, se lee en el lado «hutu» que la «sociedad ruandesa (...) siempre ha estado representada bajo la forma de tres etnias diferentes. Desde la existencia de estructuras estatales centralizadas del poder, la etnia tutsi ha dominado a las otras dos etnias, hutu y twa<sup>5</sup>».

Estas dos posiciones son ideológicas y, como sucede a menudo, son parcialmente verdaderas y parcialmente falsas. Los trabajos del historiador Jean Vansina muestran la complejidad de la historia de los términos «hutu» y «tutsi». Observa su evolución gradual: de designar antaño posiciones políticas y ocupaciones económicas y militares, la distinción entre ellos se institucionaliza a mediados del siglo XIX, y, con la introducción del impuesto sobre la tierra *uburetwa*, obligatorio solamente para los hutu, nacen dos categorías sociales jerarquizadas. Los términos «hutu» y «tutsi, designan entonces no una posición de clase o de dependencia o una ocupación, sino un estatus. Ya antes de la llegada de los primeros europeos, las tensiones entre tutsi y hutu se manifiestan por medios de revueltas de campesinos hutu hartos de ser oprimidos. A finales del siglo, grandes levantamientos anti-tutsi incendian la casi totalidad del reino. Vansina concluye que «se puede rechazar la opinión de quienes atribuyen la distinción entre hutu y tutsi y su mutua hostilidad a las acciones de los amos colonialistas<sup>6</sup>», constatación a la que nos adherimos, pero que posteriormente relativizaremos. Otro historiador de la región, Jean-Pierre Chrétien, observa «la antigüedad de esta división (étnica)<sup>7</sup>» y plantea la importancia de la extensión del reino nyiginya para la definición étnica<sup>8</sup>. Ya antes de la penetración europea, ve una «discriminación sensible entre batutsi y bahutu» y se percata de

---

tegorías étnicas no son monolíticas y de que están presentes otras identidades. Dicho esto, los discursos «hutu» y «tutsi» están formulados por elites, sobre todo en periodos de crisis, y son perfectamente reconocibles en cuanto tales.

<sup>3</sup> Comunidad ruandesa de Francia, *Mémoire sur la crise politique actuelle au Rwanda*, diciembre de 1990, p. 4.

<sup>4</sup> Office of the President of the Republic, *Report of the Reflection Meeting Held in the Office of the President Republic from May 1998 to March 1999*, Kigali, agosto, 1999, p.14

<sup>5</sup> Extracto del programa político de la Coalición por la defensa de la república (CDR), partido extremista, activo en Ruanda en los años 1990.

<sup>6</sup> J. Vansina, *Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya*, Paris Karthala, 2001, p. 177.

<sup>7</sup> J.-P. Chrétien, *L'Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d'histoire*, Paris, Aubier, « Collection historique », 2000, p.246.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 163-164.



que «el antagonismo hutu-tutsi, afianzado por las prácticas del poder, penetra (...) en la vida social de manera decisiva<sup>9</sup>». Igualmente, Catharine Newbury, politóloga americana, observa que la etnicidad política emerge y se expande en la segunda mitad del siglo XIX, no tras la estela de la ocupación europea sino de la mano del Estado central pre-colonial ruandés: «Durante el reino de Rwabugiri (1860-1895, aproximadamente), la introducción en el Kinyaga (antigua región situada en el suroeste del país) de las estructuras administrativas del Ruanda central instauró una nueva relación en las instituciones políticas y en las distinciones sociales. Es en esas condiciones como las identificaciones étnicas actuales se hicieron importantes<sup>10</sup>».

Por lo tanto, aunque las etnias ruandesas no se corresponden con la definición habitual, se constata que la etnicidad política (o, si se prefiere, moderna), con las ventajas e inconvenientes inherentes a la pertenencia identitaria, existía al final del periodo pre-colonial. Veremos más tarde que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), confrontado a la cuestión del sentido de la etnia, optó por una definición «operativa», a fin de poder calificar de genocidio los crímenes cometidos en 1994. Dicho esto, el hecho de que las etnias y la etnicidad existieran antes del periodo colonial no significa que ciertas acciones de los poderes europeos, la administración belga y la Iglesia católica en particular, no hayan jugado un papel en la evolución, intensidad y pertinencia de las categorías identitarias, antes al contrario.

En primer lugar, entre los administradores y misioneros europeos, la «hipótesis hamítica» estaba ampliamente extendida. Se consideraba que «cuanto de valioso existía en África había sido aportado por los hamitas, supuestamente de origen caucásico<sup>11</sup>». En Ruanda, la hipótesis hamítica será aplicada a los tutsi y poseía el atractivo de que determinadas características físicas<sup>12</sup> podían estar ligadas a capacidades intelectuales: los hamitas eran considerados como «nacidos para gobernar» y se les reconocía, al menos en teoría, el derecho a tener una historia y

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 161.

<sup>10</sup> C. Newbury, *The Cohesion of oppression. Clientship and ethnicity in Rwanda, 1860-1960*, New York, Columbia University Press, 1988, p. 11

<sup>11</sup> E. R. Sanders, «The Hamitic Hypothesis. Its Origin and Functions in Time Perspective», *Journal of African History*, 1969, p. 521. Ver en el mismo sentido, J.-P. Chrétien, «Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi», in J.-L. Amselle et E. M'Boloko (dir), *Au cœur de l'ethnie...*, op. cit., p. 129-165.

<sup>12</sup> Constatación perfectamente expresada por descripciones de los tutsi como «Sólo tienen de negros el color» (M. Jamouille, «Notre mandat sur le Ruanda-Urundi», *Congo*, 1927, p. 487), o también «Antes de ser ennegrecidos, estos hombres eran bronceados» (L. de Lacger, *Rwanda*, Kabgayi, 1939, p. 56).

un futuro tan nobles como los de sus «primos» europeos<sup>13</sup>. Los efectos de esta racialización de las categorías étnicas fueron numerosos y profundos.

Al observar las «oscilaciones y tergiversaciones de la administración colonial con relación a la hegemonía tradicional de los bien-nacidos tutsi», el vicario apostólico Mons. Léon Classe escribió en 1927 al presidente belga: «Pregúntese a los bahutu si prefieren ser mandados por destripaterrones o por nobles; la respuesta es indudable, su preferencia va hacia los batutsi, y con razón. Jefes natos, poseen el sentido del mando (...) Es el secreto de su instalación en el país y de su apoderamiento<sup>14</sup>. Repite en 1930 «No tendremos jefes mejores, más inteligentes y más activos, más capaces de comprender el progreso et incluso más aceptados por el pueblo, que los tutsi<sup>15</sup>».

Este punto de vista terminó por imponerse. Todos los notables hutu fueron destituidos y sustituidos por tutsi, y la administración se lanzó a una política activa en favor de la protección y reforzamiento de la hegemonía de la elite tutsi. Al cerrar el acceso de los hutu a las funciones políticas, administrativas y judiciales «indígenas», incluso a los puestos inferiores, que a veces habían ejercido en el sistema tradicional, Bélgica y la Iglesia católica acentuaron las divisiones étnicas. Otras medidas contribuyeron también a ello. Así, la abolición de la triple jerarquía de jefes (de pastos, de tierras y del ejército), considerada por la administración belga como un racionalización administrativa sin más, afectó profundamente las relaciones sociales entre los grupos étnicos y marcó el inicio de una evolución rápida hacia un sistema autoritario, concretamente al impedir que los hutu buscaran la protección de un jefe tutsi frente a otro, tutsi o hutu. A partir de los años 1930, los censos incluyen una clasificación étnica, operada por medio de auto-identificación<sup>16</sup>, lo cual creó una rigi-

<sup>13</sup> J. Linden, *Christianisme et pouvoirs au Rwanda (1900-1990)*, Paris, Karthala, 1999, p. 16.

<sup>14</sup> L. de Lacger, *Rwanda, op. cit.* p. 523.

<sup>15</sup> L. Classe, «Pour moderniser le Rwanda», *L'Essor colonial et maritime*, n.º 489, 4 décembre 1930. Este punto de vista significa un súbito y bastante impresionante cambio de opinión del vicario general. En efecto, en 1922, había escrito: «Toda esta población es inteligente. Y frente a ideas generalmente admitidas, yo diría que los tutsi no son, en general, más inteligentes que los hutu (...) El hutu es trabajador, más tenaz, pero menos pulido; por eso, vemos de ordinario en los estudios más serios al hutu que supera poco a poco al tutsi; lo mismo que aquí (en Europa) a veces comprobamos en los colegios que el niño del campo termina por ganarle al hijo de la ciudad» (L. Classe, «Le Ruanda et ses habitants: organisation politique, la religion, la famille», *Congo*, 1922, p. 681).

<sup>16</sup> Contrariamente a lo que con frecuencia se ha sugerido, sin aportar nunca prueba o fuente alguna, esta identificación no estaba basada en el número de vacas que los censados poseían.

dez y oficializó las pertenencias étnicas. En fin, los impuestos, en dinero, en especie y en trabajo, tanto para el fisco europeo como para las autoridades «indígenas», afectaban sobre todo a los hutu, «pecheros y sujetos a prestaciones» a discreción; ello contribuyó a su vez al aumento del resentimiento y del antagonismo étnico.

## 2. La revolución de 1959-1961

Demos ahora un salto hasta los años 1950. Es la época en la que convergen dos evoluciones políticas: la descolonización y la democratización. A causa de la pérdida por parte de Alemania de sus colonias, como consecuencia de la Primera Guerra mundial, Bélgica ejerció un mandato de la Sociedad de Naciones desde 1924; este mandato se transformó en tutela bajo el régimen de las Naciones Unidas en 1946. Después de la Segunda Guerra mundial, la descolonización está a la orden del día, concretamente desde la independencia de la India y de Indonesia. En 1955, la conferencia de Bandung acelera este proceso. Si bien no utiliza todavía el término «independencia», el acuerdo particular de tutela sobre Ruanda-Urundi evoca «el desarrollo de instituciones políticas libres», pide que la autoridad tutelar garantice «a los habitantes de Ruanda-Urundi una creciente participación en la administración» y expresa el deseo de que «adopte todas las medidas adecuadas para garantizar la evolución política de las poblaciones». En este texto, están claramente presentes la descolonización y la democratización, pero a la vista de las ideas belgas en esa época sobre desarrollo político, la realización de semejantes objetivos no era nada evidente.

Contrariamente a la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas siguen bastante de cerca la gestión de los territorios bajo tutela. Las autoridades tutelares deben cumplimentar cada año un cuestionario en el que se plasmen los progresos políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes del territorio. Pueden dirigirse reclamaciones a los órganos de la organización. Cada tres años, a partir de 1948, son enviadas misiones de visita a Ruanda. Ya desde la primera visita, la misión se muestra preocupada por la lentitud de la evolución política. Recomienda concretamente la democratización de las estructuras políticas y desea que sea revisada la actitud «paternalista» de la administración europea con relación a las autoridades indígenas. Las misiones se hacen cada vez más apremiantes. La de 1954 encara críticamente los fundamentos mismos de la política llevada a cabo por Bélgica, que sigue pensando que el desarrollo socio-económico debe preceder a la evolución política. Estima que es posible hacer avanzar Ruanda hacia el auto-

gobierno en veinte o veinticinco años, e insiste en una democratización acelerada, haciendo, concretamente, más representativo el sistema político indígena.

Mientras antes el diálogo se realizaba principalmente entre las Naciones Unidas y Bélgica, en el informe de la misión de 1957<sup>17</sup> resuena por primera vez la voz de los ruandeses. El hecho de que el problema étnico sea abordado en él es la consecuencia de la evolución política. En efecto, el principio electivo es introducido (tímidamente) por un decreto de 1952 en la organización política indígena. En diversos niveles, son elegidos indirectamente consejeros por un colegio de notables, pero su competencia generalmente sigue siendo solo consultiva. Con ocasión de las elecciones de 1956, el sufragio es ampliado y atrae la atención tanto sobre la superioridad numérica de los hutu como por el hecho de que esta superioridad no se traduce en una representación equitativa, sobre todo a medida que suben los escalones de la pirámide política.

La perspectiva de la evolución hacia la democracia da lugar al nacimiento de contra-elites que ponen en cuestión el poder conservador de la corte real y de las altas jefaturas territoriales, ambas compuestas exclusivamente por tutsi. Algunos notables tutsi, más jóvenes y mejor formados que sus pares conservadores, cuestionan cada vez más el antiguo orden y debilitan la autoridad del rey y de ciertos jefes antes influyentes. Aunque los hutu no han tenido acceso a la enseñanza con las mismas oportunidades que los jóvenes tutsi, algunos han podido beneficiarse de una formación en los seminarios, pero chocan con un sistema político y administrativo incapaz, que rechaza absorberlos. Este grupo se convierte en una contra-élite agriada y cada vez más frustrada ante la imposibilidad de hacer valer sus capacidades. Esta contra-élite, sobre todo a partir de mediados de los años 1950, formula el problema étnico en términos políticos, de tal modo que se forma gradualmente un movimiento reivindicativo. Ven la luz asociaciones que serán precursoras de partidos políticos; se desarrolla una intensa actividad política a la vez que se inicia una guerra de panfletos y artículos de prensa. A finales de 1958-1959, la administración de tutela y la Iglesia católica reconocen la existencia de un problema que califican de «étnico». Se produce un cambio político esencial: después de haberse apoyado durante décadas en la elite tutsi, estos dos poderes europeos aportan ahora su apoyo a las reivindicaciones de los líderes hutu. Ruanda entra en un período pre-revolucionario.

---

<sup>17</sup> El rol de la ONU está expuesto más detalladamente en F. Reyntjens, *Pouvoir et droit au Rwanda. Droit public et évolution politique (1916-1973)*, Tervuren, Musée Royal de l'Afrique centrale, 1985, p. 210-223.

Los partidos políticos creados a lo largo de 1959 se definen o son definidos como hutu o tutsi. El principal partido tutsi, la Unión nacional ruandesa (UNAR), es nacionalista y conservador (aunque utilice un discurso progresista). Temeroso de los efectos de una democratización rápida, exige la independencia inmediata. Por parte hutu, el nombre del Partido del movimiento de emancipación hutu (PARMEHUTU) resume su programa. Quiere poner fin a la hegemonía socio-económica y política de los tutsi y exige «primero, la democracia, luego, la independencia». Después de varios incidentes violentos, estalla, el 1 de noviembre, un levantamiento campesino. Numerosos jefes y sub-jefes tutsi son atacados y expulsados. Se deploran cerca de un millar de muertos y miles de viviendas incendiadas y en torno a diez mil refugiados. Es el inicio de la salida hacia el exilio de numerosos tutsi, con unas consecuencias que solo se medirán treinta años más tarde.

Todas las medidas de la administración belga van a ser ventajosas en adelante para los partidos hutu, especialmente para el Parmehutu: restauración del orden, instalación de autoridades interinas, elecciones municipales, abolición de la monarquía por un congreso de partido hutu primero y posteriormente por medio de un referéndum, y por fin elecciones legislativas. Como consecuencia de estas elecciones legislativas celebradas en septiembre de 1961, el Parmehutu obtiene el 77,7% de los sufragios, la UNAR el 16,8%. Este resultado corresponde aproximadamente a la relación demográfica entre hutu y tutsi de la época. Un referéndum celebrado en las mismas fechas abole, con el 80% de los votos, la monarquía. En dos años, Ruanda, de una monarquía controlada por las elites tutsi, se ha convertido en una república dominada por las elites hutu<sup>18</sup>.

### 3. La 1.<sup>a</sup> y 2.<sup>a</sup> Repúblicas

Hemos visto el considerable apoyo popular logrado por el Parmehutu. Según una evolución constatada igualmente en otros lugares de África, de partido dominante pasa a ser partido único de hecho. Tras la eliminación gradual de la oposición, el Parmehutu es el único que propone candidatos para las elecciones legislativas de 1965. Pasamos rápidamente revista a la historia política del país hasta 1990, ya que nos

---

<sup>18</sup> Más detalles sobre la revolución ruandesa en R. Lemarchand, *Rwanda and Burundi*, Londres, Pall Mall Press, 1970, p. 93-196; D. Murego, *La Révolution rwandaise (1959-1962). Essai d'interprétation*, Louvain, Publications de l'Institut des sciences politiques et sociales, s.d., p. 835-978 ; F. Reyntjens, *Pouvoir et droit...*, op. cit., p. 233-317.

interesan únicamente los acontecimientos fundamentales para el conocimiento histórico del genocidio contra los tutsi.

La UNAR se escinde en dos alas; una actúa en el exterior y la otra, como puede, en el interior. Sus acciones exteriores van a contribuir a la desaparición de las acciones interiores. Mientras el levantamiento de 1959 no había provocado un movimiento importante de refugiados, la violencia y las intimidaciones que acompañaron a las elecciones municipales de 1960 y sobre todo a las elecciones legislativas y al referéndum de abolición de la monarquía en 1961, trajeron consigo considerables salidas de tutsi hacia exilio. En 1962, en el momento de la independencia, unos 300.000 refugiados se encuentran en el extranjero, sobre todo en los países limítrofes. No aceptan su exilio como algo permanente y están decididos a regresar, si es posible recurriendo a negociaciones y si es preciso por vía armada. La UNAR exterior, profundamente escindida por varias líneas divisorias (monárquicos-republicanos; conservadores-progresistas; «políticos»-«militares») y paralizada por conflictos personales y relativos a la gestión de las finanzas, cesa de existir prácticamente a finales de 1964. Sin embargo, grupos de refugiados armados, algunos de los cuales se reclaman de la UNAR, llevan a cabo incursiones ya desde 1960. Las operaciones de estos «inyenzi»<sup>19</sup> fueron en general de una envergadura limitada y no pusieron realmente en peligro el régimen republicano.

En diciembre de 1963, no obstante, se lanza desde Burundi un ataque importante. Aunque los asaltantes no son más que unos centenares, se apoderan de un campo militar en construcción y se aprovisionan en armas y vehículos. Tras alcanzar Nyamata, donde viven numerosos tutsi desplazados del norte, reclutan nuevos efectivos entre esta población movilizada gracias a su presencia. En el puente de Kanzenze, a penas a veinte kilómetros del sur de Kigali, les espera el ejército, encuadrado por instructores belgas, y son derrotados tras un enfrentamiento breve pero violento. Las consecuencias de esta incursión que llegó tan cerca de la capital son desastrosas para los tutsi del interior, en dos niveles.

En primer lugar, los políticos tutsi son sospechosos de simpatizar con los asaltantes, e incluso, de complicidad en el intento de derribar las instituciones. El mismo día del ataque, tienen lugar batidas y varios

---

<sup>19</sup> Esto es, «cucarachas», porque atacan generalmente de noche. Los grupos tutsi se dieron a sí mismos este nombre. Nota del traductor: «Inyenzi» es la apelación con la que se auto-designaron los refugiados tutsi en sus varias incursiones. Se trata del acrónimo de «*Inganguraguro yiyemeje kuba ingyenzi*», que significa «combatiente de la milicia real Inganguraguro cuya divisa es ser el mejor».

centenares de tutsi, lo mismo que algunos hutu, son detenidos y encerrados en el campo militar de Kigali. Tras una «selección», unos quince de estos detenidos son transferidos a la cárcel de Ruhengeri, donde son someramente ejecutados. Entre ellos, figuran varios líderes de la UNAR del interior y el partido desaparece.

El segundo nivel concierne a los tutsi ordinarios que sufren una horrible suerte. El gobierno organiza en todas las prefecturas «comités civiles de autodefensa», llamados a actuar contra «el terrorismo y agitación del interior», un fenómeno que volvemos a encontrar en 1994 de manera más generalizada y violenta. Se inician matanzas en la prefectura de Gikongoro, donde entre 5.000 y 8.000 tutsi son matados, lo que representa entre el 10 y el 20% de la población tutsi de esta prefectura. Otras regiones quedan menos afectadas y la mayor parte del país escapa de la violencia, salvo casos de arreglos de cuentas individuales. El asunto es que estos acontecimientos provocan un nuevo movimiento de salida al exilio por parte de los tutsi. Mientras el gobierno habla de un millar de víctimas, las estimaciones de los observadores independientes las establecen en 10.000 a 14.000 muertos, la mitad de los cuales solo en la prefectura de Gikongoro<sup>20</sup>. Los ataques llevados a cabo por los *inyenzi* cesan en 1967.

En 1973, el régimen del presidente Grégoire Kayibanda, en el poder desde el año anterior a la independencia, aislado y minado por sus propias contradicciones, recurre una y última vez a la manipulación étnica para tratar de evitar su caída. Estallan en febrero disturbios graves, inicialmente de naturaleza étnica, esencialmente en tres ámbitos: la enseñanza, la administración y las empresas; luego, afectan más ampliamente a la población. Los desórdenes comienzan en los centros escolares, en los que el número relativamente elevado de docentes y de alumnos tutsi incomoda desde hace tiempo al régimen que saca el pretexto para «restablecer» proporciones «normales». La llamarada que se extiende a todas las escuelas es desencadenada por iniciativa del presidente y de su ministro de Educación nacional. Aparecen en los tabloneros de anuncios de centros de secundaria y superior listas firmadas por «Movimiento de estudiantes» o por «Comité de salvación pública». Se ruega a los alumnos que figuran en dichas listas, prácticamente todos tutsi, que «se larguen», lo que sucede en general, y si no lo hacen «comandos» del centro en cuestión o de alguna escuela próxima, se ocuparán de ellos. Estas expulsiones van a veces acompañadas de violencias. El movimiento se extiende a otros dos ámbitos. Primero, al de la función

---

<sup>20</sup> R. Lemarchand, *Rwanda and Burundi*, op. cit., p. 225.

pública y de las sociedades, siempre con el mismo procedimiento de las listas. Luego pasa al ámbito rural, sobre todo en las prefecturas de Gitarama y Kibuye. Algunos tutsi son conminados a que se marchen, sus casas son incendiadas; las violencias causan varios centenares de muertos. Los procedimientos recuerdan la revuelta de 1959. Las acciones se hacen rápidamente incontrolables. Hay algunos ministros hutu que figuran en las listas en Kigali; amotinados saquean casas de políticos y establecimientos comerciales. El movimiento supera el estadio étnico para adoptar un sesgo de lucha de clases y de conflicto regional, que opone abiertamente a políticos del norte con los del centro-sur.

De hecho, es el conflicto regional el que pondrá fin a la primera República. El 5 de julio de 1973, el general Juvénal Habyarimana, originario de Gisenyi, en el norte, toma el poder por medio de un golpe de Estado sin efusión de sangre y derriba así un régimen dominado por gentes de Gitarama (centro). La proclama del alto mando militar constata que Kayibanda «se ha dejado arrastrar desdichadamente por los objetivos de individuos que no quieren comprender que todos los ruandeses son hermanos, sea cual sea la región donde han nacido<sup>21</sup>». Mientras que el regionalismo sigue siendo una peste bajo el nuevo régimen en el que las prefecturas de Gisenyi y Ruhengeri son ampliamente privilegiadas, se observa una tendencia hacia el apaciguamiento étnico. Así, Chrétien pone de relieve que «un cierto esfuerzo de reconciliación ha sido hecho por la 2.<sup>a</sup> república del presidente Habyarimana (...), hasta el punto de colocar en difícil posición a los extremistas (hutu)<sup>22</sup>». Entre 1973 y 1990, no se producen más que pocas violencias de connotación étnica. Tras sus experiencias bajo el anterior régimen, numerosos tutsi del interior acogen favorablemente al nuevo poder. Si bien permanecen marginados políticamente, adquieren una posición influyente en el sector privado y mantienen importantes relaciones de negocios con los miembros de la elite hutu<sup>23</sup>. Sin embargo, padecen las consecuencias de una política informal (e ilegal) de cuotas que no admiten más que el 10% de tutsi en el empleo y en la enseñanza post-primaria, aunque esas cuotas no son estrictamente observadas.

---

<sup>21</sup> Proclamation du Haut Commandement de la Garde nationale, *Journal officiel de la République rwandaise*, numéro spécial, 5 juillet 1973.

<sup>22</sup> J.-P. Chrétien, «Pluralisme démocratique, ethnisme et stratégies politiques», in G. Conac (dir.), *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, Paris, Economica, 1993, p. 143.

<sup>23</sup> Claudine Vidal establece «una cuarta etnia», además de tutsi, hutu y twa, la constituida por la grande, mediana y pequeña burguesía occidentalizada; ver C. Vidal, *Sociologie des passions (Côte d'Ivoire, Rwanda)*, Paris, Karthala, 1991, p. 28-35.



La voluntad y demanda de retorno de los refugiados tutsi que rechazan aceptar como inevitable un exilio permanente y la instalación definitiva en el extranjero, sobre todo en los países limítrofes, choca desde largo tiempo con la desestimación que parece irreversible a causa de una posición adoptada por el comité central del Movimiento revolucionario nacional para el desarrollo (MRND, partido único desde 1975). El partido afirma en julio de 1986, subrayando los apremios demográficos del país superpoblado, que «en esta coyuntura, Ruanda es totalmente incapaz de garantizar ni siquiera la seguridad alimentaria de un aumento de la población proveniente de un retorno masivo de los refugiados». No obstante, «Ruanda seguirá examinando con benevolencia las demandas de repatriación individual, libre y voluntaria<sup>24</sup>». Las condiciones son apremiantes; más que miles, son centenares los refugiados que regresan. Es un hecho importante, gravemente subestimado (incluso por el autor de estas líneas). En efecto, como consecuencia de esta declaración del MRND, que parece «definitiva», los refugiados tratan de organizarse de manera más coherente y organizan una conferencia internacional en Washington en agosto de 1988. Los congresistas concluyen que la única solución a su estado de refugiados es retornar a Ruanda y buscar «por medio de la negociación con las autoridades ruandesas, los medios pacíficos para resolver el problema». Si bien los pasos preconizados oficialmente en Washington son pacíficos, determinados medios de refugiados ya se adhieren a un escenario de regreso por medio de la fuerza. Periódicos de la diáspora como *Inkotanyi* e *Impuruza*, exhortan a los jóvenes y hombres a lanzarse al combate y a tomar al asalto Ruanda. Este proyecto se materializa en 1990.

---

<sup>24</sup> République rwandaise, MRND, *Position du comité central du MRND face au problème des réfugiés rwandais*, 26 juillet 1986.



## Capítulo 2

# Transición política y guerra civil

A partir de 1990, la conjunción de tres factores va a conducir al genocidio: la transición democrática, la guerra civil y la bipolarización étnica. Los dos primeros serán abordados enseguida, pero es necesario comenzar con unas palabras sobre el carácter intrínsecamente difícil de controlar, el de la bipolaridad identitaria. Ruanda y Burundi son una excepción en África, donde las situaciones son generalmente multiétnicas. En otros lugares, no existe ningún grupo étnico mayoritario y frente a una etnia sola no hay otra etnia. «El otro» no existe; hay varios «otros». En otros lugares del mundo, las situaciones bipolares son también difíciles de controlar y fáciles de instrumentalizar. Una demostración de ello es en Chipre, los griegos y los turcos, en Irlanda del norte, los protestantes y católicos, en Bélgica, los neerlandófonos y los francófonos, en Sri Lanka, los tamiles y los cingaleses, en Oriente Medio los chiítas y los sunitas, por no citar más que estos ejemplos. En un contexto de crisis y violencia, los promotores de la etnicidad logran movilizar esas identidades y convertir al otro en enemigo, o incluso en una amenaza existencial. Veremos cómo esta movilización se activó en Ruanda.

### 1. La «democratización»<sup>25</sup>

Tras el derrumbe del muro de Berlín y del discurso en La Baule en 1990 del presidente Mitterand, que subordinaba la ayuda francesa a la

---

<sup>25</sup> Ponemos comillas porque, a semejanza de otros países de África, el proceso de democratización sigue siendo esencialmente formal; se articula en torno al fenómeno del multi-partidismo, a las elecciones y a la libertad de prensa. La vida política se reduce sobre todo a una competición entre elites urbanas que solo afecta marginalmente a mundo rural y ni siquiera afecta a la mayoría de los habitantes de las ciudades.

democratización, el presidente Habyarimana, lo mismo que la mayoría de sus pares africanos, se ve obligado a adaptarse a los apremios impuestos por el nuevo paisaje político internacional. No obstante, como en otros regímenes de África, la evolución no solo es inducida desde el exterior. Desde la segunda mitad del año 1989, la sociedad civil y la prensa ruandesas comienzan a criticar cada vez más abiertamente algunos aspectos del régimen. El 5 de julio de 1990, Habyarimana anuncia la creación de una comisión nacional de síntesis que deberá proponer una renovación política. Mientras el jefe del Estado sitúa la iniciativa en el marco del partido único, la sociedad civil no lo entiende así. El 1 de septiembre, 33 firmantes de un documento titulado «Por el multipartidismo y por la democracia» adoptan una firme posición en favor de la democratización. Cuando el 24 de septiembre se pone en pie la comisión nacional de síntesis, la perspectiva del multipartidismo no es excluida, ya que la carta que debe redactar «deberá precisar los principios a los que deberá subordinarse la constitución de cualquier formación política».

Unos días más tarde, el 1 de octubre, estalla la guerra, pero ello no hace sino acelerar los trabajos de la comisión, que publica en diciembre un anteproyecto de «Carta política nacional». Sigue un amplio debate que desemboca en un proyecto de carta a finales de marzo de 1991. La comisión propone igualmente un anteproyecto de Constitución y de Ley sobre los partidos políticos. Si bien el artículo 7 de la Constitución de 1978 (que prevé el monopartidismo) sigue en vigor, los iniciadores de los nuevos partidos se organizan ya desde febrero de 1991 en la semiclandestinidad. El primero en salir del bosque es el Movimiento democrático republicano (MDR). En marzo, el periódico *Le Démocrate* publica un «Llamamiento al relanzamiento y a la renovación del MDR» firmado por 237 personas. El texto retoma claramente la línea del MDR-Parmehutu, abolido por el golpe de Estado de 1973. No obstante, el MDR «renovado» no recoge la sigla «Parmehutu» y uno de los objetivos que se marca es la «reconciliación de las conciencias y la coexistencia pacífica de las etnias ruandesas en un clima de igualdad y de respeto mutuo».

Durante las semanas y meses siguientes, aparecen otras formaciones políticas. Los principales partidos nuevamente creados son el Partido social-demócrata (PSD), el Partido liberal (PL) y el Partido demócrata-cristiano (PDC). El 10 de junio es promulgada una nueva constitución y una semana más tarde una ley sobre los partidos políticos. Durante los meses siguientes, una docena de partidos políticos opositores desarrollan una intensa actividad, cuya principal reivindicación es la creación de un gobierno de transición de amplia base. A finales de julio, el MDR,

PL y PDC ponen en marcha un «Comité de concertación de partidos políticos democráticos», que se convertirá en un temible actor político y obtendrá cada vez más concesiones de un gobierno que inicialmente se mostraba reticente. Sin embargo, ante un movimiento de la calle que rápidamente adquiere gran amplitud, el poder acepta la puesta en pie de un gobierno de coalición. El 13 de marzo de 1992, los partidos políticos «llamados a participar en el gobierno (MRND, MDR, PSD, PL y PDC) firman un protocolo de entendimiento que incluye un programa mínimo de siete puntos, entre ellos la negociación con los rebeldes del Frente patriótico ruandés (FPR), la solución del problema de los refugiados y la organización de elecciones.

El 16 de abril, bajo la dirección de un Primer ministro, surgido del MDR, se forma un gobierno de coalición. Nueve carteras corresponden al MRND, mientras la oposición comparte diez, además del puesto de jefe de gobierno. El recorrido de este gobierno estará salpicado de incidentes y bloqueos. Diversos episodios violentos causan centenares de víctimas. Se instala una atmósfera de inseguridad generalizada, causada por amenazas, asesinatos y atentados con uso de granadas y minas. La disciplina en el seno del ejército se relaja y estallan varios motines de carácter político. El gobierno está paralizado por la discordia y por las recriminaciones entre el MRND y los partidos de oposición. Incluso en el interior del MRND y de la oposición, especialmente en el MDR, las escisiones hacen cada vez más difícil la gestión del país. Veremos más tarde que a mediados de 1993 estas contradicciones adquieren una connotación étnica en un doble contexto, por un lado de carrera hacia el poder y los privilegios y por otra de negociación con el FPR.

Las transiciones políticas se acompañan a menudo de violentos conflictos, como se ha visto en otros lugares del mundo y de África a partir de 1990. El asunto es que en Ruanda, se inicia al mismo tiempo una guerra civil que desencadenará una extrema violencia. Ahora, prestamos atención a este acontecimiento crucial.

## 2. El ataque del FPR y la guerra civil

El 1 de octubre de 1990, menos de una semana después de la puesta en pie de la comisión nacional de síntesis, Ruanda es atacado desde Uganda por un grupo armado de refugiados tutsi. Los asaltantes se llaman *inkotanyi* («los que combaten valientemente») y se presentan como la rama militar (APR, ejército patriótico ruandés) del Frente patriótico ruandés (FPR). La mayoría son miembros del ejército ugandés (National Resistance Army, NRA); son varios miles de soldados, bien entre-

nados y equipados. Este ataque tiene lugar en el momento en que se han dado avances en la resolución del problema de los refugiados. Una «Comisión especial sobre los problemas de los emigrados ruandeses», creada en 1989, había redactado un primer borrador en mayo de 1990 y un comité ministerial conjunto ruando-ugandés sobre los refugiados ruandeses instalados en Uganda acababa de adoptar a finales de julio disposiciones concretas. En este contexto, una delegación de refugiados debía visitar Ruanda a finales del mes de septiembre bajo los auspicios de Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La convergencia entre los inicios de progresos en los terrenos de la democratización y del problema de los refugiados, por un lado, y, por otro, el momento del ataque, sin duda alguna no es debida al azar. En efecto, una evolución positiva en estos dos capítulos, que se convirtieron en la punta de lanza del FPR, habría disminuido, o incluso destruido, la legitimidad de la guerra, incluso ante la opinión internacional.

El 3 de octubre, los asaltantes alcanzan el puesto de Gabiro, a unos de setenta kilómetros a vista de pájaro de Kigali, y su progresión fue detenida por las Fuerzas armadas ruandesas (FAR) apoyadas por elementos de la división especial presidencial del ejército zaireño. Mientras la mayoría de la población percibe la invasión como una tentativa de regreso por la fuerza de los refugiados tutsi, el FPR afirma perseguir un proyecto que va más allá de ese objetivo. Se presenta como una alternativa al régimen establecido en Kigali al que acusa de corrupción, nepotismo y de violación masiva de los derechos humanos. Entre otras cosas, afirma que es multiétnico y que agrupa indistintamente a hutu y a tutsi. En realidad, los ocho puntos del programa político que publica el FPR al comienzo de la guerra son ya objeto de amplios debates en el interior de Ruanda, incluso en el seno del partido único.

En un primer momento, el ataque constituye una baza objetiva para el presidente Habyarimana, cuyo régimen, como lo hemos visto, se encuentra debilitado. La mayoría de los hutu rehacen su unidad en torno a él frente a un enemigo presentado y percibido como una amenaza existencial. La composición esencialmente tutsi del FPR y la aparente continuidad entre el ataque de octubre y las incursiones de los *inyenzi* de los años 1960 refuerzan esta representación. Si bien la coexistencia entre las dos etnias es relativamente buena desde 1973, el reflejo étnico se impone inmediatamente, y, evidentemente, son los tutsi los que pagan la factura. Son denunciados como la quinta columna del FPR; miles de personas son detenidas en los primeros días de la guerra; el 90% son tutsi. En el transcurso de este periodo son masacrados centenares de tutsi en diversos lugares. Casi todos los detenidos son, no obstante, liberados en los primeros meses de 1991.

A finales de octubre de 1990, tras la derrota de los atacantes del FPR por las FAR (apoyadas por las fuerzas armadas zaireña primero y luego por el ejército francés), el FPR se retira a Uganda desde donde inicia una guerrilla más eficaz que la guerra convencional practicada al principio. En mayo de 1992, el FPR lanza un ataque que le permite ocupar algunos municipios en el extremo norte del país. Cientos de miles de personas huyen hacia el centro y son agrupadas en campos de desplazados. Una ofensiva más importante en febrero de 1993 permite al FPR ocupar una zona contigua en las prefecturas de Ruhengeri y Byumba, que, sin embargo, representa menos de la décima parte del territorio nacional. El número de desplazados se acerca al millón. Esta masa de gente vive en condiciones espantosas y considera que el responsable de su suerte es el FPR. Constituirá un vivero de matones durante el genocidio.

En otras zonas del país, masacres, teledirigidas por líderes extremistas hutu, causan un millar de víctimas tutsi, concretamente en el Bugesera en marzo de 1992, en Kibuye, agosto del mismo año y en el noroeste a finales de 1992-principios de 1993. Las dinámicas son siempre las mismas: extremistas del MRND lanzan provocaciones que son seguidas por una violencia «espontánea». El rol de los «escuadrones de la muerte» y de lo que se denomina *akazu* (literalmente, la «casita»), la red político-comercial de la familia (política) presidencial, en este proyecto de desestabilización está bien documentado<sup>26</sup>. En la zona que controla, el FPR comete también graves abusos; sin embargo, en esa época no son objeto de testimonios públicos.

### 3. El acuerdo de Arusha y su hundimiento

La combinación de dos factores está en el origen de conversaciones que culminarán en el acuerdo de Arusha (Tanzania): el impase en el terreno militar y la evolución política en Kigali. Si bien ya hubo acuerdos de alto el fuego, las verdaderas negociaciones comienzan en mayo de 1992 en Bruselas, cuando tres partidos de la oposición tienen un encuentro con el FPR. Unos días más tarde, en París, tuvo lugar un encuentro entre el gobierno ruandés y el FPR. Se trató concretamente del proceso de democratización, de la fusión de los dos ejércitos en conflicto y del establecimiento de un gobierno de transición de amplia base. En cuanto movimiento armado, el FPR se encuentra de ese modo

---

<sup>26</sup> Ver F. Reyntjens, *L'Afrique des Grands Lacs en crise*, op. cit., p. 188-192.

«aspirado» en una gestión política a la que se ve obligado a adaptarse. Sin embargo, tras diversas sesiones de conversaciones en Arusha, donde el gobierno hace concesiones considerables, se va perfilando progresivamente un acuerdo político: alto el fuego en julio de 1992, protocolo de acuerdo relativo al estado de derecho en agosto, protocolos sobre el reparto de poder en octubre de 1992 y enero de 1993.

Sin embargo, en varias ocasiones, el proceso corre el peligro de fracasar. Por un lado, el MRND adopta una posición ambigua, arguyendo que no existe consenso en el seno del gobierno sobre las líneas a mantener a lo largo de las conversaciones. Efectivamente, el gobierno discute en una posición poco confortable, ya que su delegación incluye miembros de la oposición, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, que en varios puntos se muestra próximo a las posiciones del FPR. Los dos son objetivamente aliados, ya que la oposición interna saca provecho de la guerra que lleva a cabo el FPR para obtener concesiones impensables en ausencia de amenaza militar, mientras, el FPR se beneficia del trabajo de zapa de la oposición. El gobierno, dividido frente a un unido y coherente FPR, negocia en posición de debilidad. La ambigüedad de la que hace prueba el poder se expresa también en las violencias cometidas a iniciativa del MRND (en parte empujado por el pequeño partido ultra-hutu Coalición para la defensa de la República (CDR)) contra los tutsi y opositores, especialmente a finales de 1992 y principios de 1993.

Por otra parte, en febrero de 1993, el FPR lanza una ofensiva de envergadura que es detenida a unos treinta kilómetros de Kigali gracias a la acción del ejército francés. Esta operación, que demuestra la capacidad militar del FPR, genera una inquietud grande en el seno de la sociedad civil y de los partidos de oposición, que hasta entonces habían mantenido bastante buenas relaciones con el movimiento rebelde. Se instalan las dudas: ¿quiere realmente el FPR una transición negociada o aspira más bien a una victoria militar con la esperanza de sustituir un régimen dictatorial por otro? Todos condenan de manera firme y unánime la acción del FPR. Y, además, éste pierde una parte del crédito que había adquirido en la opinión internacional.

A pesar de todo, se relanzan las negociaciones de Arusha. En mayo de 1993, un acuerdo regula el retorno y reinstalación de las personas desplazadas y la administración de una zona desmilitarizada. En junio, los partidos firman un protocolo de acuerdo sobre la repatriación de los refugiados, lo que, en principio, arregla un viejo problema que, lo hemos visto antes, estaba en el origen de la guerra civil. Finalmente, como consecuencia de la difícil negociación de un protocolo de acuerdo sobre la fusión de los ejércitos, concluye el acuerdo global en Arusha el 4



de agosto de 1993. El acuerdo constituye una redistribución fundamental de las cartas políticas. El presidente de la República es «desvestido» y reducido a estatus de jefe de Estado ceremonial. El gobierno de transición de amplia base (GTBE) se convierte en la instancia central del ordenamiento de la transición; es nombrado no por el presidente sino por las formaciones políticas llamadas a formar parte del mismo (MRND, FPR, MDR, PSD, PL y PDC). Al combinar las prerrogativas de un jefe de Estado y las de un gobierno, sus poderes son muy extensos. Los partidos políticos acreditados y el FPR ocuparán sus escaños en una Asamblea nacional de transición (ANT). Técnicas típicamente consociativas gestionan la toma de decisiones. En el seno del gobierno, las decisiones deben ser adoptadas en un primer momento por consenso y en un segundo momento por los dos tercios de los miembros. En la ANT, es necesario un mínimo de cuatro partidos para alcanzar una mayoría simple y cinco para las materias que requieren el apoyo de dos tercios. En fin, el nuevo ejército nacional quedará compuesto por el 60% proveniente de las FAR y el 40% del FPR, salvo en los puestos de mando, en los que, desde el estado-mayor al batallón, cada parte estará representada en un 50%. Las instituciones de la transición deben ponerse en pie en los treinta y siete días posteriores a la firma del acuerdo, horizonte manifiestamente irrealista. En un segundo tiempo, la duración del periodo de transición será de veintidós meses, a contar a partir de la fecha de instalación del GTBE. Una fuerza internacional para la asistencia a Ruanda (MINUAR) deberá velar por la ejecución del acuerdo.

Al examinar este acuerdo, se constata la amplitud de las concesiones hechas por el antiguo poder, que se encuentra privado de sus pilares esenciales. La función presidencial queda vaciada de sustancia, el MRND pierde su posición dominante y se convierte en un partido como los otros, el monopolio militar es compartido con el FPR. De ahí, las reticencias de las elites establecidas que corren el riesgo de perder sus privilegios, e incluso de ser llamadas a responder de su gobernanza pasada. Más allá de los intereses personales, numerosos hutu (y no únicamente los «extremistas»), consideran que el FPR ha obtenido mucho más de lo que debería y se inquietan ante el caballo de Troya que entrará en los muros, sobre todo en el ejército.

Dos principales factores van a impedir la aplicación del acuerdo de Arusha. En primer lugar, mientras que durante las negociaciones la estructuración política es tripolar (MRND, oposición interior, FPR), se transforma progresivamente en bipolar. En efecto, Desde julio de 1993, los principales partidos opositores se escinden en dos alas, una de ellas se aproxima al MRND en una tendencia «anti-Arusha», y la otra al FPR, en una tendencia «pro-Arusha». Si bien estas recolocaciones son en

parte políticas, la etnicidad juega igualmente una función, en particular en el seno del PL, partido que proporcionalmente había atraído a más tutsi y en el que hutu y tutsi se separan. En realidad, los políticos centristas se hacen aspirar por el MRND y el FPR, cuando habrían podido ejercer una influencia política considerable si hubieran constituido una tercera fuerza, capaz de situarse entre los dos extremos y lograr que la balanza se inclinase en un sentido o en otro.

Además, el 21 de octubre de 1993, en el vecino Burundi, una breve experiencia democrática es violentamente conducida al fracaso cuando el ejército, dominado por los tutsi, perpetra un golpe de Estado y asesina al primer presidente elegido democráticamente, Melchior Ndadaye, un hutu. En Kigali, numerosos hutu interpretan inmediatamente: los tutsi, por lo tanto, el FPR, jamás aceptará la democracia; el FPR, dado que no podrá conquistar el poder por las urnas, se hará con él por medio de las armas. Se trata de un análisis probablemente compartido con el FPR tras sufrir una concreta experiencia en septiembre de 1993, con ocasión de las elecciones locales en la zona desmilitarizada en el norte, zona que no controlan físicamente ni las FAR ni el MRND y en la que el FPR ha llevado adelante una campaña y ha propuesto candidatos; el antiguo partido único obtiene todos los puestos en litigio salvo uno que es para el CDR. En esta ocasión, el FPR se percata definitivamente de que no podrá acceder al poder por la vía de las urnas. El sociólogo André Guichaoua señala que esta experiencia «marca un giro que consolida el profundo desprecio de la dirección militar del FPR por los «demócratas», así como su rechazo al proceso electoral previsto en los acuerdos de paz de Arusha<sup>27</sup>».

#### 4. Las estrategias de la tensión

En realidad, las dos fuerzas principales —MRND y FPR— ya no creen en una solución política y, a la vez que hacen como que negocian y aplican el acuerdo de Arusha, desarrollan luego estrategias de tensión cada vez más violentas. Aunque estas dos fuerzas se sitúan en los extremos del paisaje político, tienen en común su rechazo a los acuerdos; los radicales del MRND quieren mantenerse en el poder, los militares del FPR desean hacerse con él.

Por un lado, el MRND, confrontado también él a divisiones internas, intenta dividir la oposición interior, en particular el MDR. Se lanza

---

<sup>27</sup> A. Guichaoua, *Rwanda, de la guerre au génocide. Les politiques criminelles au Rwanda (1990-1994)* Paris, La Découverte, 2010, p. 135.

igualmente a realizar acciones violentas, como las evocadas anteriormente en el Bugesera, en Kikuye en el noroeste en 1992 y a primeros de 1993. La incitación al odio queda perfectamente ilustrada en un discurso, que se ha hecho famoso, pronunciado en noviembre de 1992 en Gisenyi por Léon Mugesera. Incita a masacrar a los opositores («Su pena es la muerte y nada menos») y a los tutsi («Vuestro país es Etiopía y os vamos a expedir a vuestra casa a través del río Nyabarongo en viaje express. Así es. Os repito, por lo tanto, debemos ponernos rápidamente a la obra<sup>28</sup>»). Ya a mediados de 1993, elementos de las juventudes del MRND, los *interahamwe* («Los que combaten juntos»), siguen entrenamientos militares y son distribuidas armas tras la formación recibida. Este tipo de actividades no se ocultan: los milicianos son transportados en autobuses de Onatracom y en camiones militares. La selección de reclutas es realizada por el secretariado nacional del MRND y por oficiales del ejército, concretamente de la guardia presidencial. Todo el proceso es facilitado por la sustitución del ministro de defensa James Gasana, un moderado, amenazado de muerte y huido al exilio en julio de 1993, por un radical, Augustin Bizimana<sup>29</sup>.

Por otra parte, a partir de mediados de 1991, el FPR comete múltiples atentados en lugares públicos con el objetivo manifiesto de causar numerosas víctimas civiles. Durante mucho tiempo, logra que la responsabilidad de ellos recaiga en los extremistas del MRND, que, como acabamos de ver, cometen a su vez acciones violentas. Tras su derrota electoral en el norte, el FPR masacra a decenas de personas en noviembre de 1993; varias de estas víctimas son cargos electos del MRND y del CDR, vencedores en las urnas, y miembros de sus familias<sup>30</sup>. Por medio de asesinatos selectivos de políticos extremistas hutu, pero también de hutu moderados, el FPR consigue además desestabilizar la esfera política interior a primeros de 1994; contribuye de ese modo a crear un contexto que mina cualquier esperanza de solución política<sup>31</sup>. Cabe señalar por fin que el FPR instala células políticas a través del país, dirigidas por cuadros políticos entrenados en la zona controlada por el FPR. A primeros de abril, dispone en torno a 600 células, 147 de ellas en Kigali<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Léon Mugesera, extraditado por Canadá, ha sido condenado a cadena perpetua por la justicia ruandesa en abril de 2016.

<sup>29</sup> Se encontrarán detalles sobre estas actividades en A. Guichaoua, *Rwanda, de la guerre au génocide...*, op. cit., p. 234-239.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 135.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p.188-196.

<sup>32</sup> *Ibid.*-, p. 409, nota 1.

A principios de 1994, cada vez es más claro que el acuerdo de Arusha no será ejecutado. Mientras la MINUAR está desplegada desde noviembre de 1993 y un contingente del FPR está cantonado en Kigali<sup>33</sup> desde diciembre, incesantes bloqueos promovidos por los dos campos impiden el establecimiento de las instituciones de la transición. La lógica de estos bloqueos se debe sobre todo a la aritmética consociativa puesta de relieve anteriormente: el FPR quiere a todo trance garantizarse una mayoría de más de dos tercios, el campo del MRND trata de impedirlo garantizándose una minoría de bloqueo de un tercio. Como cada bloque está muy cerca de su objetivo, lo que está en juego se reduce finalmente a una cartera ministerial y a uno o dos escaños de diputado. Las dos partes se preparan para el relanzamiento de la guerra; se refuerzan de manera manifiestamente contraria al acuerdo de paz. La chispa saltará el 6 de abril.

---

<sup>33</sup> En el recinto del Parlamento nacional del desarrollo. La instalación del batallón del FPR en este símbolo de la soberanía nacional suscitó una viva hostilidad en algunos círculos hutu, y no solamente en los más extremistas.

## Capítulo 3

# El genocidio

### 1. Preparativos

El 6 de abril de 1994, a las 20:22 h, el avión del presidente ruandés se estrella cerca del aeropuerto de Kigali, tras ser alcanzado por uno o dos misiles tierra-aire. Regresaba de una cumbre regional consagrada en Dar es-Salam a las crisis de Burundi y Ruanda. No hubo ningún superviviente entre los pasajeros, entre ellos el presidente Habyarimana y su homólogo burundés Cyprien Ntaryamira. Hasta 1998, no se llevó a cabo investigación alguna digna de ese nombre sobre este atentado, que, sin embargo, marca el relanzamiento de la guerra civil, del genocidio y, más tarde, de inmensos conflictos regionales. En agosto de 1997, la familia del piloto francés del avión planea una querrela, constituyéndose en parte civil, seguida más tarde por otros derechohabientes. Sin tener que recurrir al principio de jurisdicción universal, la justicia francesa es competente dada la nacionalidad de los tres miembros de la tripulación. En marzo de 1998, se abre una instrucción judicial por asesinato por una organización terrorista. El dossier es confiado al juez de instrucción Jean-Louis Bruguière, el cual, en noviembre de 2006, señala al FPR como autor del atentado y decreta mandatos de arresto internacional contra nueve oficiales ruandeses. El presidente Kagame es beneficiario de la inmunidad acordada en Francia a los jefes de Estado en ejercicio y no puede ser perseguido judicialmente. Bruguière sugiere que el TPIR asuma el caso. En 2008, Bruguière se jubila y los jueces Marc Trévidic y Nathalie Poux proceden a nuevas investigaciones. Sin embargo, aunque todo un arsenal de indicios señala al FPR como autor del atentado, nada realmente decisivo parece salir del asunto, y, en el momento de escribir estas líneas, ninguna decisión —sobreseimiento o reenvío de la causa a la Audiencia de París— ha sido adoptada.

Aparte de unas matanzas cometidas por el ejército en Masaka, colina cercana al lugar desde donde se dispararon los misiles, Kigali permanece notablemente en calma después del atentado, pero, se trata de la calma antes de la tempestad. Dos recorridos paralelos pueden observarse durante la noche del 6 al 7 de abril. Hay en primer lugar uno público. Los altos mandos del ejército se encuentran en el estado-mayor. Proceden a la sustitución del jefe de estado-mayor que viajaba a bordo del avión. Examinan luego la manera como deberá colmarse el vacío institucional creado por la muerte del jefe de Estado. El secretario general del ministerio de Defensa, el coronel Théoneste Bagosora, y el comandante de la MINUAR, el general canadiense Roméo Dallaire, se desplazan a casa del representante especial de la ONU Jacques-Roger Booh-Booh. Éste último insiste en el respeto del acuerdo de Arusha, pide que el MRND designe un presidente interino y sugiere que el gobierno se encargue de los asuntos corrientes. Bagosora, si bien parece de acuerdo sobre los dos primeros puntos, se opone a cualquier contacto con la Primer Ministro, Agathe Uwilingiyimana, que forma parte del ala «pro-FPR» del MDR.

El segundo recorrido es invisible y cortocircuitará lo que la estructura visible ha decidido. El coronel Bagosora abandona el Estado-mayor hacia las 2 de la mañana, tras el encuentro con Booh-Booh, y a las 7 se le encuentra en el ministerio de Defensa. En estas cinco horas es cuando la máquina de matar se pone en marcha y comienza a funcionar a las 5:30 h. Bagosora dispone de una línea de radio paralela a la del ejército y gendarmería, que le une a la guardia presidencial, al batallón para-comando y al batallón de reconocimiento. Estas unidades son precisamente, y muy especialmente la guardia presidencial, las que pronto a la mañana inician la caza al hombre.

Los asesinatos selectivos en el transcurso de la mañana del 7 de abril no son de naturaleza étnica sino política. Elementos de la guardia presidencial van casa por casa para eliminar a las personalidades necesarias para la salvaguarda del acuerdo de Arusha: a la Primer Ministro Agathe Uwilingiyimana encargada de asuntos corrientes, a los dos candidatos a la presidencia de la Asamblea nacional de transición, Félicien Ngango y Landoald Ndasigwa, ante la que los juramentos debían ser prestados, y al presidente de la Corte constitucional, Joseph Kavaruganda, encargado de administrar los juramentos. Solo Ndasigwa es tutsi, pero todos son considerados como parte del bloque pro-FPR. El vacío humano e institucional así creado permite al grupo de Bagosora poner en pie el gobierno interino que presidirá el

genocidio<sup>34</sup>. Decenas de (supuestos) opositores son asesinados de manera selectiva. Entre ellos, políticos pero también funcionarios, magistrados, periodistas y líderes de la sociedad civil. El destino reservado a la oposición y a otras voces disidentes permite eliminar eventuales obstáculos al proyecto genocida y, por medio del terror, disuadir a todos los que estarían tentados de resistirse a él.

Paralelamente al inicio de las masacres, el FPR inicia una ofensiva militar que comienza temprano en la mañana del 7 de abril a partir de la zona que controla en el norte del país. Al final de la tarde, su batallón cantonado en el Parlamento entra en combate con elementos de la guardia presidencial, cuyo campamento se encuentra en las cercanías. Es el inicio de los enfrentamientos que van a permitir al FPR controlar progresivamente el terreno en Kigali y, finalmente, en julio, ganar la guerra<sup>35</sup>.

## 2. Puesta en práctica<sup>36</sup>

### *Organización*

Ruanda tiene una larga tradición de gestión político-administrativa piramidal, en la que las consignas pasan rápidamente de la cima a la base por medio de estructuras intermedias descentralizadas (prefecturas, municipios, sectores, células). Así es como, en el pasado, el gobierno movilizó y encuadró a la población para diversas campañas, por ejemplo, de vacunación, alfabetización o reforestación. Esos círculos concéntricos de jerarquías políticas y administrativas permitieron comprometer a toda la población en programas gubernamentales. Un estrecho sistema de control en el ámbito local obligaba incluso a los reacios a participar en esas acciones o, al menos, a abstenerse de realizar una resistencia visible. Los organizadores del genocidio pudieron utilizar esas mismas estructuras para lanzar su campaña de exterminio de los tutsi y de los hutu que se oponían a ello. Permitió implicar a

---

<sup>34</sup> Las circunstancias en torno al comienzo del genocidio están detalladamente descritas en A. Guichaoua, *Rwanda, de la guerre au génocide...*, op. cit., p. 241-353; F. Reyntjens, *Rwanda, trois jours qui ont fait basculer l'histoire*, Paris, L'Harmattan, 1995, Cahiers Africains n.º 16.

<sup>35</sup> Observemos que no ha sido consagrado ningún estudio al desarrollo de la guerra; toda la atención de los investigadores se focalizó en el genocidio.

<sup>36</sup> Este relato se basa en parte en la obra pionera de A. Des Forges, *Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda*, Paris, Karthala, 1999. Abrió la vía a numerosos trabajos realizados sobre el terreno y a los que nos referiremos.

toda la población e incitar o forzar a la mayoría de los hutu a participar en las masacres o a no oponerse a ellas.

El primer círculo se sitúa en el nivel nacional y está compuesta por una alianza de civiles y militares. Hemos evocado anteriormente el «segundo recorrido» que gravita en torno al coronel Bagosora. Ya en la reunión en el estado-mayor la noche del 6 al 7 de abril, aparecen dos bandos. Un ala moderada quiere tranquilizar la situación, permanecer en la legalidad y preservar la lógica de los acuerdos de Arusha. La otra propone que el ejército tome en mano la situación, evitando al mismo tiempo dar la impresión de que da un golpe de Estado. Esta división permanece visible el 12 de abril, cuando diez oficiales superiores moderados publican un comunicado que llama a «poner fin a esta tragedia», a instalar las instituciones previstas en los acuerdos y a firmar un alto el fuego con el FPR. Entre tanto, el coronel Bagosora ha tomado la delantera en los terrenos militar y político.

Por un lado, coordina la acción de los mandos de unidades que cometen asesinatos políticos primero y el genocidio luego, a partir de la mañana del 7 de abril. Cuando un oficial moderado nombrado jefe de estado-mayor el 7 de abril<sup>37</sup>, el coronel Marcel Gatsinzi, es sustituido el 16 de abril por el general Augustin Bizimana, considerado más «fiable», el ejército ya dejará de oponerse a las matanzas; antes al contrario, participará activamente en ellas, concretamente armando a los civiles y ayudándoles a cometer las masacres.

Por otro lado, Bagosora preside el 8 de abril en el ministerio de Defensa una reunión decisiva. Convoca a los líderes de las alas pro-MNRD de los partidos de oposición, cuyos dirigentes pro-Arusha en ese momento o han muerto o están escondidos. En la misma lógica, ningún tutsi es asociado a las negociaciones, a las que, evidentemente, el FPR no ha sido invitado. Estamos, pues, muy lejos de Arusha. Se decide que el Presidente del Parlamento, Théodore Sindikubwabo, asegure el interin de la presidencia. «Un gobierno interino» es nombrado con Jean Kambanda, del ala «hutu power» del MDR<sup>38</sup>, como Primer Ministro. En contra de una práctica consolidada, el gobierno no cuenta con ningún tutsi.

Presentado como un gobierno de coalición, solo lo es en apariencia. Aunque cuenta con miembros de los mismos partidos que el ante-

---

<sup>37</sup> Para sustituir al general Déo Nsabimana, que pereció en el avión presidencial.

<sup>38</sup> «Hutu power» o «Pawa» en kinyarwanda designa al ala radical del partido. El término parece haber sido utilizado por primera vez el 23 de octubre de 1993, con ocasión de un mitin de protesta celebrado en Kigali contra el asesinato del presidente burundés Ndadaye dos días antes.



rior, pertenece en realidad íntegramente a la «corriente-presidencial», y los más activos comparten el mismo punto de vista sobre el destino que debe reservarse a los tutsi. La diferencia entre el MRND y las «alas anti-Arusha» de las antiguas formaciones opositoras desaparece completamente, lo cual queda perfectamente ilustrado por el hecho que, cuando el gobierno interino abandona Kigali para residir en Murambi (prefectura de Gitarama), el 12 de abril, es acompañado por todos los jefes de partido, y porque el Consejo de ministros incluye representantes de esos mismos partidos<sup>39</sup>. Veremos luego que el mismo fenómeno de fusión de los partidos se reproduce en las juventudes de milicianos.

El protocolo firmado por los partidos para la puesta en marcha del gobierno es un documento sorprendente. El preámbulo evoca la «muerte inesperada» de la Primer ministro y de algunos miembros del gobierno, cuando esas personas han sido fríamente abatidas por elementos del ejército. Por otra parte, el protocolo juega a la «normalidad» de modo extraño. En efecto, se presenta como la simple prolongación y mejora de protocolos de formación de gobierno anteriores. Las tareas asignadas al gobierno consisten concretamente en «garantizar la gestión efectiva de los asuntos del Estado, poniendo especialmente el acento en el restablecimiento rápido del orden y de la seguridad de las personas y de las propiedades» y en «proseguir las discusiones con el FPR para la puesta en pie de las instituciones de transición de amplia base, en un plazo no superior a seis semanas». La misma apariencia de normalidad se percibe en el caso del nombramiento de Kambanda; éste presenta su equipo, a la vez que firma igualmente el decreto de formación. Se trata, evidentemente, de una falsa normalidad ya que, en el mismo momento, el genocidio y las masacres políticas se han lanzado plenamente, mientras que el FPR, instalado en Kigali, ha entrado en acción desde hace 24 horas y el grueso de sus tropas ha iniciado una ofensiva en el norte. El 9 de abril, el equipo gubernamental presta juramento en el hotel de los Diplomates en Kigali en presencia de una asistencia limitada: además de los miembros del nuevo ejecutivo, algunos diputados, algunos dirigentes de los partidos, algunos oficiales y funcionarios; ningún extranjero. Tras la instalación del gobierno, Bagosora se eclipsa y ya no parece ejercer un protagonismo político<sup>40</sup>.

El gobierno interino utiliza el aparato administrativo para movilizar al mayor número posible de personas. El 19 de abril, el presidente Sin-

---

<sup>39</sup> A. Guichaoua. *Rwanda, de la guerre au génocide...*, op. cit., p. 455-456.

<sup>40</sup> Pueden encontrarse más detalles sobre la formación del gobierno interino en A. Guichaoua, *Rwanda, de la guerre au génocide...*, op. cit., p. 321-335 y en F. Reyntjens, *Rwanda, trois jours...*, op. cit., p. 86-91.

dikubwabo declara que su equipo es un «gobierno de salvadores» que se acercaría al pueblo «para deciros lo que espera de vosotros». Este discurso y muchos otros son ampliamente difundidos para hacer que los ciudadanos se muestren «más determinados a garantizar su propia seguridad y alertar sobre los causantes de disturbios<sup>41</sup>». Los ministros y altos funcionarios no sólo dirigen desde arriba, sino que van a las colinas, generalmente a sus lugares de origen, incitando y animando a los habitantes a que participen activamente en el genocidio, prometiendo diversas ventajas a los autores de los crímenes y amenazando a los reacios. Ya hemos observado el directo lazo de unión entre el centro y la periferia con ocasión de las masacres genocidas cometidas a finales de 1963.

Los círculos siguientes se sitúan en el nivel de las prefecturas y en el ámbito local. La organización en estos ámbitos es flexible y se adapta a las circunstancias y depende concretamente de la voluntad y capacidad de las autoridades oficiales para comprometerse plenamente con las violencias. Su posición en la jerarquía es secundaria respecto a su apoyo al proyecto genocida. Así, en el interior del sistema, hay subprefectos que eclipsan a prefectos, antiguos alcaldes que suplantán a titulares oficiales. Del mismo modo, en el aparato militar tenientes pueden ignorar las órdenes de oficiales con más grado, o incluso amenazarlos y darles instrucciones. En algunos lugares, personas sin función oficial, como comerciantes, docentes, religiosos, militares desmovilizados o jubilados, o, todavía, jefes de milicia, asumen un mando efectivo en la persecución y asesinato de tutsi<sup>42</sup>. Como es el caso frecuentemente en semejantes circunstancias, el momento es propicio para arreglos de cuentas individuales que ignoran cualquier jerarquía oficial. A pesar de las apariencias de estructuras políticas, administrativas y militares formales, la gente sabe generalmente bien quién ejerce en realidad el poder, quién decide sobre la vida o la muerte.

Los prefectos transmiten las consignas y siguen su ejecución, pero son sobre todo los alcaldes y sus subordinados los que de hecho movilizan a la población. Del mismo modo que durante la guerra habían instalado barreras y patrullas, dirigen ahora las acciones contra los tutsi. Envían concejales y responsables del sector y de célula de casa en casa, informando a los hombres adultos dónde deben «trabajar» y colocan en los tableros de las oficinas municipales listas con las «tareas» que

---

<sup>41</sup> Cartas circulares del ministerio del Interior a los prefectos, 21 de abril de 1994.

<sup>42</sup> Sraus (in *The Order of Genocide. Race, Power, and War in Rwanda*, Ithaca y Londres, Cornell University Press, 2006, p. 91) aporta una visión útil de estas dinámicas locales.

hay que cumplir. Amenazan con sanciones a los reacios y cesan a los responsables que no obedecen a sus órdenes. Los «comités de seguridad» existentes son reavivados y se crean nuevos comités donde no existían. En numerosos casos, los alcaldes se ocupan de los detalles cotidianos del genocidio; dicen, por ejemplo, cuáles son las casas que deben registrarse para descubrir tutsi, dónde deben ser instaladas las barreras y quiénes deben guardarlas para evitar que los tutsi escapen. Igualmente, reclaman la presencia del ejército o de la gendarmería, sobre todo cuando consideran que el número de tutsi que se debe eliminar es muy numeroso. Mandan a esas fuerzas, a los policías municipales, a los milicianos e incluso a ciudadanos ordinarios que quemen casas o que amenacen a los que rehúsan unirse a las matanzas. Uno de los recursos más importantes de los alcaldes es su poder en la distribución de tierras. Lo utilizan a menudo para prometer a los matones que recibirán las tierras de sus víctimas. En fin, dado que los alcaldes son los encargados del registro civil, pueden decidir sobre la vida o la muerte certificando que tal persona es hutu o tutsi.

El gobierno presenta las masacres como una reacción popular espontánea del pueblo tras la muerte del presidente Habyarimana, así como un acto de auto-defensa frente a la ofensiva del FPR. Ahora bien, hay numerosos datos que muestran el carácter organizado de las mismas. Así, salvo algunos incidentes, la prefectura y la ciudad de Butare permanecen en relativa calma, gracias a la acción de su prefecto, Jean-Baptiste Habyalimana (el único prefecto tutsi del país), de otras autoridades locales y de algunos oficiales del ejército y de la gendarmería. Sede de la universidad nacional, Butare es la capital intelectual del país, los partidos de la oposición están bien instalados en ella y las relaciones étnicas son razonablemente armoniosas. Los tutsi constituyen una cuarta parte de la población de la ciudad. Con el deseo de quebrar la resistencia de Butare y de arrastrar a la prefectura a las masacres, el gobierno destituye al prefecto, que posteriormente será asesinado<sup>43</sup>. El 19 de abril, con ocasión de la instalación de su sucesor, el Primer ministro y varios ministros están presentes, para mostrar bien la importancia del acontecimiento. En sus discursos, el Presidente y el Primer ministro anuncian que «la guerra final» ha comenzado, que las autoridades y la población de Butare deben abandonar su actitud «laxista» y que todo el mundo debe ponerse al «trabajo», término utilizado para designar las masacres de los tutsi. Quienes rehúsan unirse a la campaña de exterminio

---

<sup>43</sup> El mayor de la gendarmería, Ciriague Habyarabatumu, que había apoyado al prefecto en la resistencia al genocidio, fue trasladado a Kigali.

nio son amenazados sin ambigüedad. Estas declaraciones intimidadoras tienen una eficacia inmediata. Después de unas reuniones en los ámbitos de la prefectura y de los municipios, el genocidio se extiende al conjunto de la prefectura de Butare el 22 de abril.

Se observa un fenómeno comparable en la prefectura de Gitarama, en el centro del país. El prefecto, Fidèle Uwizeye moviliza a sus alcaldes para organizar la resistencia a la violencia. Bajo la dirección de las autoridades locales, hutu y tutsi intentan juntos detener a los asaltantes y matan a varios de ellos. Esta resistencia de las autoridades prefectorales y locales quedará progresivamente quebrada cuando, el 12 de abril, el gobierno interino, que huye de los combates de Kigali, se instala en Kavumu, cerca de la ciudad de Gitarama. Las amenazas se hacen cada vez más concretas y los reacios son calificados de cómplices del FPR, lo que equivale a una condena de muerte. Semejante presión hace bascular hacia el campo del genocidio a numerosas personas que hasta entonces habían protegido a los tutsi. Es el caso de Jean-Paul Akayezu, alcalde de Taba, después de que los *interahamwe* se introdujeran en su municipio. Será el primer condenado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). La Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) difunde los nombres de los alcaldes opuestos al genocidio, lo que significa una directa amenaza. El prefecto Uwizeye termina por huir en mayo y es sustituido por un oficial que deja el campo libre a las fuerzas del genocidio.

Si bien las masacres no tienen nada de espontáneo y que incluso son organizadas, la cuestión de su «planificación» subsiste. En primer lugar hay que señalar que la Convención de 1948 para la prevención y represión del crimen de genocidio no requiere la planificación, sino la «intención» de destruir un grupo étnico. Luego, todo depende del sentido que se dé a la noción de «planificación». Si se trata de un momento o un lugar preciso en el que unos conjurados se reúnen para organizar un genocidio y preparar los instrumentos para ello, no existe ningún indicio de la existencia de un complot en ese sentido antes del 6 de abril. Ello no significa forzosamente que no haya habido una planificación; solamente que no ha sido probada<sup>44</sup>. Es la opinión igualmente de los jueces del TPIR. Así, en la causa «Militares I» contra Bagosora y tres co-inceptados, el tribunal los absuelve de la inculpación de entendimiento/alianza con vistas a cometer genocidio y la Sala afirma «que no está convencida de que el fiscal haya establecido fuera de toda duda

---

<sup>44</sup> Ver C. Vidal, «Le fait d'entente en vue de commettre le génocide. Entre le judiciaire et l'historique au Rwanda », in F. Reyntjens, S. Vandeginste et M. Verpoorten (dir.), *L'Afrique des Grands Lacs Annuaire 2014-2015*, Anvers, UPA, 2015, p. 269-286.

razonable que los cuatro acusados se hayan puesto de acuerdo entre ellos para cometer genocidio, previamente a su desencadenamiento el 7 de abril». Por nuestra parte, pensamos que se trató más bien de un proceso en cuyo transcurso la posibilidad de un genocidio se fue precisando progresivamente y que los instrumentos para realizarlo fueron gradualmente puestos en práctica. Cuando se observa la confusión y la improvisación que reinan al anochecer del 6 de abril, día previo del inicio del genocidio, es muy probable que la decisión no hubiera sido compartida anteriormente y preparada colectivamente.

La presencia de un dispositivo antes del 6 de abril ni siquiera era necesaria para desencadenar el genocidio. Después del atentado, ante el relanzamiento de la guerra, conscientes de su propia fragilidad, los extremistas lanzan la orden de la guerra total y final. Las medidas adoptadas y los medios puestos en práctica analizados permiten posteriormente insuflar y mantener la dinámica que se extiende por todo el país. En ese mismo sentido, la socióloga Claudine Vidal estima que la fecha del 12 de abril «marca sin ambigüedad el comienzo del genocidio en intención y en acto», Es el día en que el gobierno interino emite varios comunicados por medio de Radio Rwanda; declara que la guerra es un responsabilidad de todos y hace un llamamiento a todos «a luchar contra el enemigo común», «siempre el mismo», el que quiere «restablecer la monarquía<sup>45</sup>».

No obstante, esta constatación, como se ha dicho antes, no tiene ninguna incidencia sobre la calificación jurídica del crimen. De cualquier manera, incluso en ausencia de planificación precisa antes del atentado del 6 de abril contra el avión presidencial, las autoridades extremistas del gobierno interino se dotaron de los medios precisos para ejecutar un genocidio eficaz, que habría sido llevado hasta el final si sus responsables no hubieran sido derrotados militarmente por el FPR<sup>46</sup>. Las masacres de tutsi entre abril y julio de 1994 corresponden, sin ninguna duda, a la definición propuesta por la convención para la prevención y represión del crimen de genocidio. En efecto, los tutsi en su conjunto son objeto de un proyecto de exterminio, no por lo que han o habrían hecho, sino por ser lo que son. Se trata bien de «exterminio, en todo o en parte, del grupo étnico tutsi en cuanto tal». En cuanto a los opositores a la política del genocidio, fueron generalmente eliminados, fueran hutu o tutsi.

---

<sup>45</sup> C. Vidal, « Enquêtes au Rwanda. Questions de recherche sur le génocide tutsi », *Agone*, n.º 53, 2014, p. 132.

<sup>46</sup> La tesis de la planificación es estudiada detalladamente y rechazada por A. Guichaoua, *Rwanda, de la guerre au génocide...*, *op. cit.*, p. 443-453 y 573-581.

## Medios

Se pusieron en práctica diversos medios para ejecutar el proyecto genocida. En primer lugar, las milicias: durante el periodo de transición, en 1991-1992, se crearon las «juventudes de partido». En un primer momento, se trata de organizaciones como se encuentran en todas partes y que sirven para incorporar a jóvenes con objeto de ampliar la base del partido y reclutar futuros cuadros. Se asiste al nacimiento concretamente de los *interahamwe* («los que combaten juntos») del MRND, de los *inkuba* («trueno») del MDR y de los *impuzamugambi* («los que tienen un solo objetivo»), de la CDR. Poco a poco estas juventudes son utilizadas igualmente para encuadrar las demostraciones en la vía pública y para proteger a los manifestantes del partido contra los de los otros partidos, de manera que se arman con palos y porras. Posteriormente, en el transcurso de los meses precedentes al genocidio hay *interahamwe* que reciben formación paramilitar, incluso en el manejo de armas de fuego.

Cuando comienza el genocidio, la distinción entre los diferentes movimientos se borra. Los *interahamwe* y los *impuzamugambi* actúan juntos y a ellos se unen los *inkuba* del ala MDR-Power. Por otra parte, los que anteriormente no formaban parte de un movimiento de jóvenes pero que se unen a los milicianos en las barreras y en las batidas contra los tutsi son llamados, todos ellos, *interahamwe*, término que se convierte en genérico y deja de limitarse solo a los jóvenes del MRND. Las rivalidades políticas desaparecen en favor del «bien común» que es la campaña de exterminio. Esta realidad es lúcidamente reconocida y reivindicada incluso por un líder de la CDR: «Las juventudes que se peleaban ayer entre ellas se han agrupado para combatir al agresor, el FPR y sus cómplices, al lado de las Fuerzas armadas ruandesas (FAR). Esta vez, esas juventudes se han convertido realmente en fuerzas paramilitares y se baten no con piedras y porras o cables eléctricos, sino con verdaderas armas de guerra. Los objetivos ya no son las juventudes de los otros partidos políticos sino los soldados del FPR infiltrados sobre todo en las filas de los civiles así como entre los civiles cómplices con el enemigo<sup>47</sup>»; estos últimos términos designan evidentemente a los tutsi en su conjunto.

Los medios de comunicación, sobre todo la radio, muy escuchada en Ruanda, constituyen otro poderoso medio. En el transcurso del ge-

---

<sup>47</sup> J.B. Barayagwiza, *Rwanda. Le sang hutu est-il rouge? Vérités cachées sur les massacres*, Yaoundé, 1995, p. 246. El autor fue condenado por el TPIR por incitación al genocidio.

nocidio, tanto Radio Ruanda como la cadena privada RTLM difunden incitaciones a las masacres e instrucciones para su perpetración. Las radios son utilizadas para advertir sobre la existencia de «infiltrados» que vendrían a masacrar a hutu y para reclamar vigilancia. Se dan instrucciones para realizar «trabajos comunitarios» (*umuganda*): rastrillar el bosque y las marismas, visitar casas, controlar los drenajes... Auténtico medio de difusión del odio, la RTLM repite machaconamente los mensajes del radicalismo hutu: el antiguo antagonismo entre hutu y tutsi, la superioridad demográfica de los hutu (*rubanga nyamwinshi*, «el pueblo mayoritario»), las artimañas de los tutsi, su crueldad, su insolidaridad, su intención de restaurar el feudalismo y la represión de antaño, el peligro que representan para las conquistas de la revolución de 1959 y, sobre todo, su plan de exterminio de los hutu. Lo mismo que las autoridades políticas y administrativas, esta radio advierte a los reacios que serán severamente castigados por «deserción»<sup>48</sup>.

Por fin, la «autodefensa civil» demuestra ser un temible instrumento del genocidio. Este programa, que se había instituido desde el comienzo de la guerra en 1990 en las zonas cercanas al frente, comportaba la organización de patrullas de civiles (llamadas *amarondo*, una kinyarwandización de la palabra «ronda») y también de autoridades locales armadas y de reservistas del ejército. El politólogo Scott Straus observa que esta práctica incorporaba a civiles en la guerra y preparaba así la vía a la participación civil en el genocidio<sup>49</sup>. Cuando en otoño de 1993 la generalización del programa está prevista por Bagosora y por un comité en el seno del ejército para hacer frente al FPR en caso de relanzamiento de la guerra, perspectiva que ya entonces se precisaba, esta estructura no está plenamente instalada a primeros de abril de 1994, sino que su puesta en práctica es decidida por el gobierno ya el 12 de abril. El plan consiste en movilizar a civiles sobre la base de las entidades administrativas y no sobre la base partidaria a fin de colocarlos bajo el mando de oficiales jubilados o de otros militares.

Este dispositivo es movilizado desde las primeras semanas del genocidio. Inicialmente en Kigali, unos militares enseñan técnicas de combate a jóvenes, mientras que las autoridades comienzan rápidamente a reclutar nuevos combatientes en otras zonas del país. Ya a finales de abril, Radio Rwanda anuncia que este programa es necesario, ya que «la guerra se lleva en todo el país», pero es a finales de mayo cuando el Primer ministro anuncia formalmente el plan organizativo, muy de-

<sup>48</sup> Sobre el rol de medios de comunicación, ver J.-P. Chrétien *et alii*, *Rwanda. Les médias du génocide*. Paris, Karthala, 1995.

<sup>49</sup> S. Straus, *The Order of Genocide...*, *op. cit.*, p. 26.

tallado y complejo que cubre desde el centro hasta las zonas periféricas más alejadas, como lo quiere la tradición burocrática ruandesa. La «auto-defensa civil» es un factor determinante en el transcurso del genocidio; sirve para organizar las masacres, encuadrar, supervisar y armar a los civiles más eficazmente; sirve además para garantizar mejor la disciplina y para tratar de evitar que unos hutu maten a otros hutu. Dado que el programa no distingue entre civiles tutsi y militares del FPR, estos reclutas no solo están involucrados en el genocidio sino que igualmente combaten los avances de los rebeldes. Estos jóvenes, la mayoría armados únicamente con armas blancas, no dan la talla ante aguerridos combatientes del FPR, por lo que son numerosos los que mueren en los enfrentamientos con el ejército del FPR. No obstante, juegan un considerable rol en la perpetración del genocidio<sup>50</sup>.

### Desarrollo

Hemos evocado las matanzas selectivas de opositores (supuestos o potenciales) que tuvieron lugar en la mañana del 7 de abril. Otras víctimas, consideradas como cómplices o infiltrados del FPR, ya habían sido identificadas y localizadas. Se trata concretamente de jóvenes, sobre todo del PSD y del PL, que habían simpatizado abiertamente con los militares instalados en el Parlamento. Eran ya considerados como enemigos antes del relanzamiento de la guerra, vigilados y sospechosos de ser infiltrados; son los primeros en ser eliminados<sup>51</sup>.

Rápidamente se erigen en Kigali barreras. Ocupadas por *interahamwe*, pero igualmente por jóvenes de otros partidos, sirven para controlar los desplazamientos. Los carnés de identidad (que incluyen una mención étnica) son examinados; los tutsi son detenidos y matados, generalmente con armas blancas. Las personas que no presentaban el carné se juzgaban por su aspecto físico y las que tenían rasgos que supuestamente correspondían al «tipo tutsi» sufrían la misma suerte. Después de unos días, las matanzas se convierten en más sistemáticas y organizadas. Los tutsi son descubiertos en sus casas y conducidos a edificios oficiales, iglesias, escuelas u otros lugares públicos, donde son masacrados a gran escala.

Las matanzas de tutsi se extienden rápidamente al conjunto del país, salvo inicialmente, como hemos visto, en Butare y Gitarama<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Puede encontrarse más información sobre la organización de la auto-defensa en A. Guichaoua, *Rwanda, de la guerra al genocidio...*, op. cit., p. 480-484 y 516-521.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 411.

<sup>52</sup> Straus suministra una lista, municipio por municipio, de los momentos iniciales del genocidio (*The Order of Genocide*, op. cit., p. 249-255).



Encontramos generalmente dos modos operativos. Por un lado, cuando comienzan las matanzas, muchas personas, sobre todo tutsi pero igualmente algunos hutu, se sienten amenazadas y buscan refugio en hospitales, escuelas, iglesias, campos de deportes y otros lugares públicos. Frecuentemente, las autoridades locales o los milicianos las animan a dirigirse a estos lugares o los conducen a ellos. Una vez atrapadas, rodeadas de civiles caldeados a tope, milicianos o militares, las víctimas son masacradas, generalmente a golpe de porras, de hacha o de machete y a veces por arma de fuego y granadas. Cada vez, cientos y a menudo miles de tutsi son asesinados en uno o dos días<sup>53</sup>. La segunda modalidad apunta a tutsi individualmente. Son atacados en sus casas, perseguidos de colina en colina, detenidos y matados en las barreras levantadas por todo el país<sup>54</sup>. Estas violencias se cometen con gran crueldad. Las víctimas son quemadas vivas, arrojadas muertas o agonizantes en letrinas, rematadas lentamente a machetazos, lo que lleva a algunas a pagar a los asesinos para que las maten de un tiro. En el caso de los matrimonios étnicamente mixtos, son numerosos los que son obligados a matar a miembros tutsi de su propia familia.

Hacia finales de abril, las autoridades decretan una campaña de «pacificación» que, no obstante, no trata de terminar con las masacres, sino que busca un mejor control, que se ha hecho necesario ya que numerosos atacantes se dedican a arreglos de cuentas incluso entre hutu. Los milicianos y otros ciudadanos deben llevar a los «sospechosos» hacia lugares oficiales en lugar de matarlos donde los han encontrado. Esta campaña es utilizada igualmente para animar a los tutsi a salir de sus escondites y matarlos cuando salen a descubierto. Hacia mediados de mayo, la fase final tiene como objetivo hacer batidas contra los supervivientes de las oleadas de masacres anteriores: quienes han podido permanecer escondidos, los que han sido hasta entonces tratados con indulgencia —mujeres, niños— o los que, por su estatus comunitario, han sido protegidos, como los sacerdotes o el personal médico. Frente al avance militar del FPR, se trata también de eliminar a los supervivientes que podrían prestar testimonio más tarde. A lo largo del genocidio, las mujeres tutsi fueron frecuentemente violadas y mutiladas antes de ser asesinadas.

---

<sup>53</sup> Alison Des Forges (en *Aucun témoin...*, *op. cit.*, p. 246) da una lista de un centenar de lugares donde este *modus operandi* puede observarse, pero la lista no es exhaustiva.

<sup>54</sup> Luego veremos el rol de los grupos en las matanzas.

A diferencia de la Shoah, este genocidio no es un acto cometido por especialistas que disponen de instrumentos creados al efecto (convoyes ferroviarios, campos de exterminio, cámaras de gas), sino una acción descentralizada, llevada a cabo por un una gran número de gentes sencillas, lo que hace de él un «genocidio popular»<sup>55</sup>. La densidad de las estructuras políticas y administrativas característica de Ruanda, país a la vez centralizado y descentralizado, ofrece a los líderes del genocidio un acceso rápido y fácil a la población traumatizada por la guerra y la propaganda. Tanto por medio de la radio nacional y de la RTL M como con ocasión de numerosas reuniones públicas, la afirmación de la infiltración por parte del FPR y de la existencia de una quinta columna es ampliamente martilleada. Ello convence a numerosos hutu de que sus vecinos tutsi son agentes del FPR y que la amenaza debe ser combatida. Según esos discursos, atacar a los tutsi se convierte en una medida de «auto-defensa». Además, se prometen diversos beneficios: tierras, comercios, casas abandonadas por las víctimas. Jóvenes sin perspectivas de acceso a la tierra o en el mercado de trabajo, algo indispensable para formar una familia, son permeables a este tipo de promesas, lo mismo que los desplazados que han huido de las zonas de guerra. Numerosos hutu, sobre todo en el centro y en el sur, resisten inicialmente a la incitación a las matanzas. Sin embargo, frente a las intimidaciones, e incluso amenazas de muerte, la mayoría se ven obligados a abandonar su oposición pública al genocidio.

El antropólogo Lee Ann Fujii llama la atención sobre la manera regular como son cometidas las masacres en todo el país. En primer lugar, los participantes matan en grupo, y no en cuanto individuos y esos grupos son a menudo importantes, mucho más de lo que sería necesario para acabar con las víctimas, que generalmente no estaban armadas y no tenían posibilidades de huir. En segundo lugar, la gran mayoría de las matanzas son actos públicos perpetrados a pleno día y, en consecuencia, visibles para todos. En tercer lugar, los verdugos y sus víctimas están en una situación frontal, cara a cara. La utilización de armas blancas que pertenecen a la vida cotidiana (machetes, hachas, mazas, azadas) no permite la distancia física de las armas de fuego. Por fin, las matanzas comportan elementos teatrales. Los matones cantan y gritan eslóganes («Pawa»<sup>56</sup>), golpean bidones, utilizan silbatos, visten con hojas de banana para «disfrazarse». En numerosos casos, las violaciones, torturas y mutilaciones tienen igualmente una función ritual o ceremonial<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> J.-P. Kimonyo, *Un génocide populaire*, Paris Karthala, 2008.

<sup>56</sup> Kinyarwandización del inglés power, «poder».

<sup>57</sup> L.A. Fujii, *Killing, Neighbors, Webs of Violence in Rwanda*. Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2009, 171-175.

### *Dinámicas y motivaciones*

Según un punto de vista ampliamente extendido, el genocidio podría explicarse por el odio étnico, pero esta tesis es invalidada por investigaciones meticulosas sobre el terreno. Straus ha interrogado a 210 personas condenadas por su participación en el genocidio. Sus respuestas, en su gran mayoría, relatan unas actitudes positivas hacia los tutsi antes del genocidio. Incluso después del comienzo de la guerra con el FPR en 1990, esas actitudes cambiaron poco. Por ejemplo, el 96% de los participantes afirman haber tenido un vecino tutsi con el que tenían buenas relaciones; cerca del 69% tenían algún familiar tutsi y cerca del 99% se casarían con una mujer tutsi o no se opondría al matrimonio de un hijo o hija con una o un tutsi. Apenas un 2,4% califican sus relaciones con los tutsi de negativas; el dato cambia al 12,5% tras el inicio de la guerra. Straus constata igualmente que en el medio rural, la ideología y propaganda «racista» no jugaron un rol importante. Preguntados si habían oído hablar de los «Diez mandamientos hutu<sup>58</sup>», si consideran Ruanda como el país de los hutu o si los hutu odian a los tutsi, más del 90% responde negativamente.

De igual modo, los datos de Lee Ann Fujii contrastan con las tesis que privilegian la explicación del genocidio por un antiguo antagonismo étnico. En efecto, las personas interrogadas insisten más bien en factores situacionales y motivos personales, como la codicia y la envidia<sup>59</sup>. Los participantes ordinarios en el genocidio no mencionan su odio étnico contra los tutsi en cuanto grupo. Al contrario, califican como buenas las relaciones que mantenían con sus vecinos tutsi antes del inicio de las masacres<sup>60</sup>. Para Lee Ann Fujii, el conflicto no opone principalmente a dos grupos étnicos, sino a elites que utilizan la violencia para mantenerse en el poder. El conflicto «étnico» es por ende político<sup>61</sup>.

Tanto Straus como Lee Ann Fujii proponen una lectura diferente de la que con frecuencia se avanza<sup>62</sup>. Straus muestra que convergieron tres factores principalmente para hacer posible el genocidio: la guerra, el poder estatal y las clasificaciones étnicas preexistentes. La guerra

---

<sup>58</sup> Texto virulentamente anti-tutsi publicado en el n.º 6 (diciembre de 1990) del mensual *Kangura* que dice concretamente que «los hutu deben cesar de tener piedad para con los tutsi».

<sup>59</sup> L.A. Fujii, *Killing Neighbors...*, *op. cit.*, 127-132.

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 119.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 45.

<sup>62</sup> Se desmarcan en este punto del análisis de Kimonyo (*Rwanda. Un génocide populaire*, *op. cit.*), que sitúa el genocidio en la larga duración que se inicia con la revolución de 1959.

legitimó la violencia y engendró el miedo y la incertidumbre; factores que crearon un contexto facilitador de las masacres. Estima que «sin la guerra el genocidio no habría tenido lugar<sup>63</sup>». La fuerza del Estado fue también determinante. Las matanzas eran «autorizadas», convertidas en política oficial: era la ley; desobedecer las consignas era traicionar. Por fin, el discurso genocida se dedicó a transformar la representación de los tutsi como individuos asimilándolos a todos con una identidad étnica globalmente amenazadora<sup>64</sup>.

Además, Straus añade que el asesinato del presidente Habyarimana constituyó un factor crucial. La mayoría de sus informadores describen cómo su muerte cristalizó un miedo hasta entonces difuso y dio una nueva fuerza a la propaganda ligada a la guerra. Desde ese momento, los vecinos tutsi se convierten en una amenaza real y son vistos como aliados del FPR, cuyo último objetivo sería exterminar a los hutu. La combinación de sentimientos de miedo, de rabia, de venganza, de autodefensa y de seguridad hace el resto. Según este credo, los hutu están en guerra; matan para ganarla, para vengar la muerte de su presidente y para garantizar su seguridad<sup>65</sup>.

Lee Ann Fujii, por su parte, al centrarse en las motivaciones individuales de los actores locales, observa que los participantes insisten en las circunstancias y avanzan motivos personales. Las violencias cometidas lo son a causa de acontecimientos no en razón de la identidad. Los factores primordiales son la creación de una situación que «forzaba a las gentes a hacer lo que hicieron», la experiencia de violencias pasadas, la envidia y la codicia, así como «la lógica de la contaminación<sup>66</sup>». En el ámbito de la vecindad, el genocidio era socialmente incorporado a un conjunto de lazos de unión intensos. Se trata de lazos sociales y no de pertenencia étnica, que han modelado los procesos de reclutamiento de matones y de antagonismo de las víctimas<sup>67</sup>. En este contexto, la dinámica de grupos fue una poderosa fuerza de homogeneización<sup>68</sup>. «Las matanzas provocaron la creación de grupos y los grupos produjeron las matanzas<sup>69</sup>. Esta dinámica de grupo se refuerza de acto en acto; cada etapa abre la vía a otra<sup>70</sup>.

<sup>63</sup> S. Straus, *The Order of Genocide...*, op. cit., p.226.

<sup>64</sup> *Ibid.*, p. 225-226. «Umwanzi ni umwe ni umututsi» («El enemigo es uno: el tutsi»), *ibid.* p. 225.

<sup>65</sup> *Ibid.*, p. 172-173.

<sup>66</sup> L.A. Fujii, *Killing Neighbors...*, op. cit., 89-102.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p. 128-129.

<sup>68</sup> *Ibid.*, p. 154-179.

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 154.

<sup>70</sup> C. Vidal, *Enquêtes au Rwanda...*, op. cit., pa. 137.

Por fin, es importante señalar que son numerosas las violencias que nada tienen que ver con lo étnico o político. Como es frecuente el caso en situaciones de guerra e inestabilidad, la ocasión es propicia para proceder a arreglos de cuentas, al acaparamiento de tierras y comercios, o, también, a la eliminación de acreedores. Existen pocos estudios sobre este tipo de matanzas y sus víctimas, pero una investigación local muestra bien la diversidad de los actos criminales y de sus motivaciones. De 28 personas asesinadas en un sector situado en el noroeste (donde viven pocos tutsi), una sola víctima es tutsi (el único habitante perteneciente a este grupo étnico<sup>71</sup>). Las 27 víctimas restantes son hutu; dos de ellos poseían tierras relativamente importantes, siete son pobres casi sin tierras, cinco son considerados como «generadores de disturbios» y cinco son incluso miembros de milicias<sup>72</sup>. Igualmente, los entrevistados por Lee Ann Fujii señalan la envidia individual y la codicia como causas importantes de la violencia más que las tensiones o animosidades entre grupos étnicos. La codicia formaba parte de la vida cotidiana antes del genocidio, pero el contexto de violencia, de incertidumbre y de inestabilidad permitió la realización de proyectos criminales, incluso contra vecinos y amigos. Evidentemente, no se puede extrapolar las constataciones de Catherine André y Jean-Philippe Platteau sobre el conjunto de Ruanda, pero sugieren que el número de víctimas de este tipo de crímenes, sin ligazón política o étnica, podría ser perfectamente elevado.

### *Resistencias*

La extensión rápida del genocidio no debe ocultar el hecho de que entre los hutu no reina la unanimidad. Tanto en los ámbitos político, administrativo como militar, son numerosos los que se oponen a las masacres, al menos en sus inicios. Ya hemos aludido al comunicado lanzado el 12 de abril por diez oficiales superiores que toman con claridad distancias con relación al gobierno interino. Hemos evocado igualmente la sustitución del jefe de estado-mayor interino, Marcel Gatsinzi, opuesto al genocidio, por el general Augustin Bizimungu. En diversos lugares, algunos oficiales tratan de proteger a tutsi y llevarlos a sitios se-

---

<sup>71</sup> Según los informadores de André y Platteau, ni siquiera es seguro que fue eliminado por ser tutsi, ya que habían existido disputas con vecinos por otros motivos.

<sup>72</sup> C. André y J.-P. Platteau, *Land tenure unendurable stress: Rwanda caught in the Malthusian trap*, n.º 164, janvier 1996. Este texto muestra el aumento de litigios sobre la propiedad de la tierra y de tensiones sociales mucho antes del genocidio, así como los lazos de unión entre estos conflictos y los crímenes cometidos en 1994.

guros, concretamente en las prefecturas de Kibuye, Butare y Cyangugu. Son amenazados por subalternos ganados a la causa genocida, matados o enviados al frente. La RTLM encuentra una explicación para los reveses militares del ejército en la presencia de «cómplices» en su seno. Éstos «están traicionando a la patria; y traicionar a la patria es traicionar a los hutu<sup>73</sup>». Tan tarde como a mediados de mayo, el gobierno discute sobre una lista de doce oficiales superiores considerados como *ibiyitso* («cómplices») del FPR, que deben ser objeto de una operación de depuración<sup>74</sup>.

Si bien en el ámbito político central, quienes habrían podido oponerse al proyecto genocida, los líderes hutu y tutsi de las alas «pro-Arusha o «pro-FPR» de los partidos políticos, fueron eliminados desde el comienzo, algunas autoridades prefecturales y municipales intentan evitar o combatir las masacres. Hemos visto que el prefecto de Butare lo pagó con su vida, tanto él como su familia. Lo mismo que el prefecto de Kibungo, Godefroid Ruzindana, que primero fue destituido y luego matado con su familia, cuando intentaba huir. Hemos evocado también las resistencias iniciales al genocidio en la prefectura de Gitarama.

Una última forma de resistencia es la organizada por los tutsi mismos. En numerosos lugares se baten contra el exterminio. Además de los quince casos más emblemáticos bien conocidos y documentados, existen centenares de colinas donde este fenómeno se produjo. Nos detenemos aquí únicamente en la colina de Biseseo, en la prefectura de Kibuye, en parte por su carácter emblemático, y en parte porque el protagonismo del ejército francés, desplegado en el marco de la operación Turquoise, ha dado lugar a numerosos debates que siguen sin resolverse<sup>75</sup>. Los tutsi del entorno oponen una feroz resistencia del 8 de abril al 1 de julio. La colina Biseseo es elegida para este combate a causa de su elevada situación, que permite observar bien a los asaltantes, y de sus bosques, que ofrecen escondites. Se trata, igualmente, de un lugar histórico en el que los tutsi ya habían encontrado refugio con ocasión de la revolución de 1959. Según algunas fuentes, Radio Muhabura del FPR había aconsejado también a los tutsi que se refugiaran allí.

<sup>73</sup> J.-P. Chrétien *et alii*, *Rwanda. Les média ...*, *op. cit.*, p. 266-267.

<sup>74</sup> A. Guichaoua, *Rwanda, de la guerre au génocide...*, *op. cit.* P. 505-512.

<sup>75</sup> La operación Turquoise, autorizada por la resolución 9291 de 22 de junio de 1994 del Consejo de seguridad de la ONU, es una operación militar llevada a cabo por Francia con la misión de «poner fin a las masacres donde ello fuera posible, utilizando, eventualmente, la fuerza». Ver O. Lanotte, *La France au Rwanda (1990-1994. Entre abstention impossible et engagement ambivalent*, Bruselles, Peter Lang, 2007, p. 384-387.

Así, cuando comienzan las masacres, miles de tutsi convergen en Bisesero, donde son atacados por milicianos llegados de municipios vecinos. Ante su resistencia, los asaltantes solicitan el apoyo de militares y de milicianos de otros lugares, concretamente de Gisenyi. En un ataque el 13 de mayo, miles de tutsi son matados, pero persiste la resistencia y numerosos asaltantes pierden la vida. A primeros de junio, a petición del prefecto de Kibuye, el gobierno interino ordena al mando militar de Gisenyi que envíe tropas para acabar con este «santuario del FPR». Como consecuencia de un ataque que se asemeja perfectamente a una operación militar, con uso de armas pesadas, la mayoría de los tutsi que han resistido en la cima de la colina es masacrada. Entre las decenas de miles que encontraron refugio en Bisesero, menos de 1.500 hombres, mujeres y niños, sobreviven a la carnicería. El ejército francés se hace cargo de ellos y posteriormente los entrega al FPR, pero persisten las dudas sobre la cuestión de saber si los militares franceses habrían podido salvar a más gente<sup>76</sup>.

### *Número de víctimas*

El número total de víctimas tutsi no es conocido con precisión, pero muestreos locales y familiares indican que en torno a tres cuartas partes de los tutsi residentes en Ruanda durante el genocidio fueron matados. Si admitimos que, según los datos actualizados del censo de 1991, había un máximo de 800.000 tutsi, el número de víctimas del genocidio podría elevarse a cerca de 600.000. En el año 2000, el gobierno ruandés actual fijó la cifra de víctimas en una cifra de absurda precisión, 1.074.017, de las que el 94% son tutsi, lo que resulta aberrante frente a la realidad demográfica y al número de supervivientes tutsi y de víctimas hutu. Nosotros, por nuestra parte, llegamos a un balance que se sitúa entre 1.050.000 y 1.150.000 muertos en el año 1994, cifra que incluye, además de las víctimas del genocidio, a los hutu asesinados por el FPR e igualmente por otros hutu por razones políticas o en arreglos de cuentas, así como a los muertos por epidemias en los campos de refugiados, en particular en Zaire<sup>77</sup>. Nos percatamos del carácter aleatorio de esta evaluación: no hay ningún dato cierto; únicamente los datos del censo de agosto de 1991 parecen fiables. Un nuevo censo, inme-

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, p. 461-477.

<sup>77</sup> F. Reyntjens, «Estimation du nombre de personnes tuées au Rwanda en 1994 », in S. Marysse et F. Reyntjens (dir.), *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 1996-1997*, Paris, L'Harmattan, 1997, 179-186.

diatamente después del genocidio, habría podido clarificar la cuestión del número de víctimas. La comunidad internacional propuso su apoyo al efecto, pero el FPR no se mostró interesado, por lo que no se hizo. La ausencia de semejante censo ha permitido al FPR, por un lado, hacer aceptar sus cifras de víctimas del genocidio, cuando dichas cifras no se basan en datos científicos, y, por otro, ocultar la amplitud de las masacres que él mismo cometió.

### 3. Crímenes cometidos por el FPR<sup>78</sup>

Mientras que los extremistas hutu proceden abiertamente en el genocidio, el FPR realiza, él también, masacres a gran escala pero que escapan a la atención de los medios de comunicación y, en consecuencia, del público internacional. Ya durante los primeros días del relanzamiento de la guerra, el contingente del FPR en Kigali mata, apoyándose en listas, a decenas de civiles, miembros de la elite hutu y a sus familias. Sobre todo, comete amplias masacres en las zonas que controla. Una práctica usual consiste en organizar «reuniones de la paz» con el pretendido objetivo de ofrecer información y asistencia, pero que en realidad constituyen una estratagema frecuentemente utilizada para agrupar a los habitantes, que son invitados o forzados a ello. Una vez agrupados, son rodeados y asesinados<sup>79</sup>. Numerosos episodios de este tipo están documentados y causan cada vez centenares, si no miles, de víctimas. Estas prácticas son denunciadas por organizaciones como Refugees International, Amnistía Internacional y el ACNUR, que, por ejemplo, informa que el APR reúne a gentes para matarlas, y muchas personas «todavía vivas, con las manos y pies atados», son arrojadas al río Akagera<sup>80</sup>.

Las masacres prosiguen después del final de la guerra. Diez días después de que el FPR tomara el control de Kigali, un oficial del servicio de información de la MINUAR señala que «el FPR dirigía dos centros de interrogatorios en Kigali y que durante todo el día tenían lugar ejecu-

---

<sup>78</sup> Se encontrarán más detalles sobre estos crímenes en F. Reyntjens, *Rwanda. Gouverner après le Génocide*, Paris, Les Belles Lettres, 2014, p. 125-137.

<sup>79</sup> Esta práctica está tan extendida que los ruandeses consideran como sinónimos las expresiones *kwitaba inama* («ser convocado a una reunión») y *kwitaba imana* («ser llamado por Dios»), horrible juego de palabras.

<sup>80</sup> «El ACNUR acusa al FPR de continuar masacrando y torturando en Ruanda», *Ginebra, AP.*, 17 de mayo de 1994.



ciones sumarias<sup>81</sup>». Antiguos miembros del APR interrogados por la fiscalía del TPIR confirman las matanzas de hutu a gran escala. Uno de estos testigos afirma que en el campo militar de Bigogwe, «durante todo el mes de noviembre de 1994, tres o cuatro camiones repletos de prisioneros llegaban todos los días o cada dos o tres días». En numerosos casos, los cuerpos son incinerados<sup>82</sup>. HRW establece masacres cometidas en numerosos lugares en los que, en cada ocasión, más de mil personas son asesinadas<sup>83</sup>. Informaciones recogidas por investigadores del TPIR recientemente hechas públicas muestran incluso que civiles tutsi habrían colaborado con elementos del FPR en batidas contra hutu<sup>84</sup>. Amnistía Internacional señala que «el APR supervisó estrechamente y controló los movimientos de extranjeros en las zonas situadas bajo su control (...) Por ello (...) pocas informaciones sobre los abusos perpetrados por el APR pudieron ser reunidas o publicadas por observadores independientes<sup>85</sup>». Es lo que, en parte, explica la dificultad de proponer una estimación fiable del número de víctimas del FPR. Sobre la base de informaciones disponibles, se trata cuando menos de decenas de miles de víctimas. Gérard Prunier estima incluso que es posible que la cifra alcance los 100.000 muertos<sup>86</sup>. La realización de un nuevo censo, del que hemos hablado antes, habría podido aclarar esta cuestión, pero ya hemos visto que el FPR se opuso a ello.

A pesar de esta discreción y de la manera como el APR limita el acceso al teatro de las atrocidades, la información termina por emerger. En agosto-septiembre de 1994, un equipo del ACNUR dirigido por Robert Gersony visita los campos de refugiados y una cuarta parte de los municipios ruandeses. Constata que «zonas significativas de las prefecturas de Butare, Kibungo y regiones del sureste de la prefectura de Kigali han sido (...) el teatro de asesinatos sistemáticos y de persecución de poblaciones civiles hutu por parte del APR. (...) El exterminio ciego

---

<sup>81</sup> R. Dallaire, *J'ai serré la main du diable. La faillite de l'humanité au Rwanda*, Outremont (Quebec), 2003, p.580.

<sup>82</sup> Deposition del 28 de marzo de 2002, TPIR referencia R0000299-302; deposition del 18 de mayo de 2002, TPIR referencia R0000280-283.

<sup>83</sup> Human Rights Watch, *The Aftermath of Genocide in Rwanda*, New York, sept. 1994; Human Rights Watch, *Rwanda: A New Catastrophe?*, New York, dic. 1994.

<sup>84</sup> J. Rever, «What Remains Hidden in Rwanda»: The Role of Tutsi Civilians in Killing Hutu, *Foreign Policy Journal*, 3.06.2016.

<sup>85</sup> Amnesty International, *L'armée patriotique rwandaise responsable d'homicides et d'enlèvements (avril-août 1994)*, Londres, octubre 1994.

<sup>86</sup> G. Prunier, *Rwanda 1959-1996. Histoire d'un génocide*. Paris, Editions Dagorno, 1997, p. 427. Prunier escribe esto en un capítulo adicional en la traducción francesa de una obra publicada inicialmente en inglés (G. Prunier, *The Rwanda Crisis. History of a Genocide*, New York, Columbia University Press, 1995).

de hombres, mujeres y niños, sin olvidar a los ancianos y enfermos, fue regularmente señalado<sup>87</sup>». Gersony observa que las masacres tienen como objetivo a los hutu sin distinción: «Ningún procedimiento de control, ninguna tentativa para establecer la complicidad de las víctimas en las masacres de tutsi en abril de 1994 ha sido detectada<sup>88</sup>». El equipo estima que de mayo a julio entre 15.000 y 30.000 personas habrían sido matadas de ese modo por el APR. A mediados de septiembre de 1994, un Memorandum del Departamento de Estado americano evoca una «purificación étnica» y expresa el temor de que las masacres «sirvan también a reducir la población hutu masculina y desanimen a los refugiados a regresar para recuperar sus tierras<sup>89</sup>. La naturaleza y extensión de los crímenes cometidos eran suficientemente conocidas en los años siguientes<sup>90</sup>.

El relator especial de la ONU, René Degni-Ségui, conforma las ejecuciones sumarias, las masacres y desapariciones forzadas cometidas por el FPR: anota que «a las fosas comunes ya numerosas debido a las acciones de los milicianos y de las fuerzas armadas ruandesas han venido a añadirse las provocadas por el APR, de modo que actualmente resulta difícil distinguirlas<sup>91</sup>». De nuevo por parte de la ONU, una comisión de expertos concluye que «individuos pertenecientes a los dos campos en el conflicto armado de Ruanda (...) han perpetrado crímenes contra la humanidad<sup>92</sup>». Recomienda que «la investigación sobre violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos atribuidas al Frente Patriótico Ruandés sea llevado a cabo por la fisca-

---

<sup>87</sup> «Prospects for early repatriation of Rwanda refugees currently in Burundi, Tanzania and Zaire. Summary of UNHCR presentation before Commission of Experts», Ginebra, 10 de octubre de 1994, p. 4.

<sup>88</sup> *Ibid.*, p. 8.

<sup>89</sup> «New Human Rights Abuses in Rwanda», memorándum de información del secretario de Estado adjunto para Asuntos africanos George E. Moose para el secretario de Estado. Este documento no está fechado, pero según su contenido, pudo haber sido redactado entre el 17 y 19 de septiembre de 1994.

<sup>90</sup> Para tener una visión del asunto, ver S. Desouter y F. Reyntjens, *Rwanda. Les violations des droits de l'homme par le FPR/APR. Playoder pour une enquête approfondie*, Anvers, Institut de politique et de gestion du développement, Université d'Anvers, Working Paper, junio de 1995.

<sup>91</sup> Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, *Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda soumis par M. René Degni-Ségui, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application du paragraphe 20 de la résolution S-3/1 du 25 mai 1994*, E/CN.1995/70, 11 novembre 1994, paragraphe 40.

<sup>92</sup> Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, *Rapport final de la commission d'experts présenté conformément à la résolution 935 (1994) du Conseil de sécurité*, S/1994/1405, 9 de diciembre 1994, párrafo 181-182.

lía (del TPIR)<sup>93</sup>». Veremos más adelante que no se hizo nada al efecto y que el FPR gozará de una impunidad total.

#### 4. Responsabilidades

Los primeros responsables del genocidio son, evidentemente, los que lo cometieron, esto es, los extremistas hutu y los miles de individuos a los que arrastraron a cometer el crimen. Después del atentado del 6 de abril, el grupo de coronel Bagosora cierra la puerta a cualquier posibilidad de salvar el acuerdo de Arusha y pone en pie un gobierno interino que presta juramento el 9 de abril. Tal y como lo hemos visto, todos los ministros pertenecen a las alas «pro-MNRD» de sus respectivos partidos. El 11 de abril, con ocasión de una reunión de prefectos, se prepara la extensión de las masacres. Al día siguiente, el gobierno comienza a movilizar a la población. Un líder del ala extremista del MDR afirma en la radio nacional que «la guerra es responsabilidad de todo el mundo». Radio Rwanda y RTL M señalan cada vez más a los tutsi, y no solo al FPR, como el enemigo y el gobierno pone en práctica dispositivos para impedir que los tutsi huyan del país.

La responsabilidad del FPR no es tanto jurídica como histórica y política. En el momento en que atacó el 1 de octubre de 1990, no podía ignorar, a la luz de las experiencias del pasado, que el ataque pondría en peligro de manera extrema a los tutsi del interior. Mientras inicialmente éstos, como lo hemos visto, son víctimas de amenazas y de cárcel, incluso de algunas matanzas, el peligro del genocidio está presente desde el inicio, aunque no es ineluctable. Al cometer atentados y asesinatos políticos y al adoptar la estrategia de la tensión, el FPR practica una política extremadamente peligrosa, de la que los extremistas sacan partido para emprender su política de lo peor. Por consiguiente, el FPR toma un riesgo considerable. Según Kuperman, «los rebeldes se esperaban que provocarían represalias genocidas, pero veían en ello un precio aceptable para alcanzar su objetivo, el poder<sup>94</sup>». Cuando, durante el genocidio, el general Dallaire pide a Kagame que despliegue sus hombres para salvar a los tutsi amenazados, le responde: «Esta guerra será la causa de muchos sacrificios. Si los refugiados deben ser sacrificados por la buena causa, se considerará que estaban incluidos en ese sacrifi-

<sup>93</sup> *Ibid.*, 186.

<sup>94</sup> A. Kuperman, «Provoking genocide: A revised history of the Rwandan Patriotic Front», *Journal of Genocide Research*, vol. 6, n.º 1, 2004, p. 63.

cio<sup>95</sup>». Guichaoua se plantea la cuestión de saber si el FPR subestimó o integró el riesgo del genocidio. Tras analizar varias hipótesis, su conclusión es severa: «El FPR no entró en guerra ni la llevó a cabo para “salvar a los tutsi”; se hizo con el poder en Kigali por medio de la fuerza al precio de la vida de sus compatriotas<sup>96</sup>».

La comunidad internacional es el tercer responsable, de manera y en momentos diferentes. En primer lugar, Francia sostuvo, políticamente y militarmente, al régimen establecido hasta 1994. Este apoyo no era forzosamente ilegítimo, pero comportaba como corolario una obligación, la de usar su influencia en un régimen muy dependiente para que tomara el camino de la democracia, del respeto de los derechos humanos y de la paz. Des Forges señala que con ocasión de la misión de información parlamentaria francesa sobre Ruanda, políticos y militares afirman que Francia ambicionaba impulsar las reformas democráticas y el respeto de los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, evitar una victoria militar del FPR. Sobre la base del apoyo incondicional de Francia, el régimen de Habyarimana habría concluido que París consideraba el segundo objetivo más importante que el primero<sup>97</sup>. Esta ambigüedad no finaliza con el comienzo del genocidio. El embajador de Francia en Kigali es asociado a la puesta en pie del «gobierno interino», cuya composición apoya<sup>98</sup>. Cuando la envergadura de las masacres y el rechazo del nuevo gobierno a poner fin a ellas se hacen patentes, Francia se convierte en el único país que reconoce al «gobierno interino»: el ministro de asuntos Exteriores, mientras Bélgica y EE.UU. vetan su venida, es recibido en París, donde tiene un encuentro con Bruno Delaye, jefe de la célula africana en el Elíseo.

Posteriormente, la comunidad internacional en su sentido más amplio reacciona de manera totalmente inapropiada cuando explota la violencia. Por un lado, como consecuencia del asesinato de diez cascos azules, Bélgica decide retirar unilateralmente su batallón, haciendo de ese modo que la MINUAR sea inoperante. Peor todavía, por la insistencia de Bélgica y de los EE.UU., el Consejo de seguridad de la ONU decide reducir la MINUAR a una fuerza simbólica de 270 hombres. El establecimiento de una MINUAR II se verá bloqueada mucho tiempo por la aplicación de la PDD25 americana<sup>99</sup>; al mismo tiempo, los Estados Uni-

<sup>95</sup> R. Dallaire, *J'ai serré la main...*, op. cit. p. 451.

<sup>96</sup> A. Guichaoua, *Rwanda. De la guerre au génocide...*, op. cit. p. 442.

<sup>97</sup> A. Des Forges, *Aucun témoin...*, op. cit., p. 146.

<sup>98</sup> A. Guichaoua, *Rwanda de la guerre au génocide...*, op. cit., p. 380-386.

<sup>99</sup> Inspirada concretamente por la debacle somalí, esta *Presidential Decision Directive* trataba de limitar el número y coste de operaciones de mantenimientos de la paz.

dos evitan el «G-word», esto es, la utilización del término «genocidio» para calificar los crímenes cometidos en Ruanda, a fin de sortear una obligación de intervenir en virtud del derecho internacional.

A partir del 9 de abril, están sobre el terreno tropas de elite francesas y desde el 10 de abril tropas belgas también de elite. Estos dos países, sin tener en cuenta excelentes elementos belgas, ganeanos y tuneños de la MINUAR, disponían en Kigali de 1.500 hombres y habrían podido impedir la escalada de la violencia que desembocó en el genocidio<sup>100</sup>. En lugar de intervenir en un país en el que tienen responsabilidades históricas, estos dos «amigos de Ruanda» evacúan a los expatriados y a algunos escasos ruandeses, retiran sus fuerzas y cierran la puerta de atrás tras ellos, dejando a un pueblo hundido en el horror absoluto. Según oficiales ruandeses y extranjeros preguntados al respecto, una acción conjugada de los contingentes francés y belga, de la MINUAR y de, incluso, elementos de las FAR no favorables al genocidio, habría podido traer la tranquilidad y dominar la violencia antes de que fuera demasiado tarde<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Una compañía italiana está también sobre el terreno y un batallón de «Marines» americanos está, en *stand-by*, en Bujumbura, a menos de una hora de vuelo.

<sup>101</sup> Hay que reconocer que el FPR contribuyó a disminuir las posibilidades de semejante opción al anunciar, el 12 de abril, que si las tropas extranjeras no abandonaban Ruanda en el plazo de 60 horas, «serían consideradas como fuerzas enemigas». El 30 de abril, cuando el Consejo de seguridad plantea reforzar de nuevo la MINUAR y de dotarle de un mandato más amplio para proteger las poblaciones civiles, el FPR se opone a ello «categóricamente», arguyendo que ya no hay tutsi a los que salvar. Ahora bien, en ese momento, decenas de miles de tutsi siguen con vida y es evidente que el FPR teme que la fuerza internacional pueda interponerse con el objetivo final del FPR, la victoria militar.



## Capítulo 4

# Las secuelas

### 1. Tratamiento judicial

Evidentemente, un genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra no pueden quedar impunes, cuando cientos de miles de personas han sido masacradas por un considerable número de asesinos. Pero, la palabra «justicia» no es tan neutra: para parafrasear el célebre aforismo de Clausewitz, se podría decir que el derecho es la continuación de la guerra por otros medios. En lo concerniente a Ruanda, nosotros no estudiamos aquí los detalles técnicos de la justicia transicional, sobre la que existe un gran número de publicaciones, sino, más bien, sus aspectos políticos en tres niveles: la justicia nacional ruandesa, en particular los *gacaca*; el Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR); y la aplicación de la competencia universal en países terceros. En estos tres niveles, lo que ha prevalecido es la justicia de los vencedores.

#### *La justicia en Ruanda*

Durante el genocidio, el aparato judicial quedó devastado: numerosos jueces, fiscales y agentes administrativos murieron, en la cárcel o en el exilio, y las infraestructuras se destruyeron. Sin embargo, cerca de 100.000 personas son detenidas, generalmente en terribles condiciones, por su presunta implicación en el genocidio. Contrariamente a lo que se produjo en otras situaciones post-conflicto, el FPR no se ve obligado a negociar un compromiso, ya que, en cuanto único vencedor de la guerra, se encuentra en posición para imponer su manera de gestionar el pasado. El asunto es que el desafío es gigantesco. Numerosos au-

tores evocan «la imposibilidad de la justicia» y la búsqueda de «soluciones a problemas imposibles»<sup>102</sup>.

La posición inicial del gobierno es triple: la justicia sería retributiva, nacional y dispensada por los tribunales ordinarios. En julio de 1995, el gobierno rechaza la asistencia de jueces extranjeros, al estimar que el ofrecimiento de algunos países es inconstitucional y viola la soberanía nacional, pero, sin duda también, porque trata de conservar el control de los procedimientos judiciales. Los procesos no empiezan hasta finales de 1996 e inmediatamente se plantean cuestiones sobre los derechos de las defensas, sobre el tratamiento de los sospechosos y testigos, así como sobre la presunción de inocencia<sup>103</sup>. A primeros de 1998, solo 330 personas han sido juzgadas: a ese ritmo serían necesarios más de cuatro siglos para juzgar a todos los sospechosos. Amnistía Internacional sigue expresando su inquietud por la corrupción y la injerencia del gobierno, tal y como los muestran las «desapariciones», la intimidación, la exclusión, la detención o el exilio de numerosos magistrados<sup>104</sup>. Se plantea también el problema de «los sindicatos de delación». Especialmente, la asociación de supervivientes del genocidio *Ibuka* («recorrad») que paga testimonios de cargo, a menudo «preparados», y amenaza a testigos de descargo<sup>105</sup>. Frente al evidente callejón sin salida de finales de los años 1990, la clase política comprende que se impone una alternativa.

Antes de abordar esta alternativa, que consistió en la institución de los tribunales *gacaca*<sup>106</sup>, debe decirse aunque sea una palabra sobre el tratamiento judicial de los crímenes cometidos por el FPR. Si bien éste prometió en varias ocasiones que sus militares responderían de sus actos, lo que reinó fue la impunidad. De 1994 a 1998, 34 soldados fueron perseguidos judicialmente; solamente 14 fueron juzgados y condenados, pero jamás por crímenes de guerra o contra la humanidad y siempre a ligeras condenas. De 1998 a 2008, no tuvo lugar ninguna persecución judicial, y veremos que el proceso llevado a cabo por el

---

<sup>102</sup> Por ejemplo, B. Schabas, «justice, democracy, and impunity in post-genocide Rwanda: Searching for solutions to impossible problems», *Criminal Law Review*, vol. 7, n.º 3, 1996, p. 523-560.

<sup>103</sup> Ver por ejemplo Amnesty International, *Rwanda. Procès inéquitables: justice bafouée*, Londres, abril de 1997.

<sup>104</sup> Amnesty International, *Rwanda. Gacaca, une question de justice*, Londres, dici. 2002, p. 16.

<sup>105</sup> Liprodhor, *Procès de génocide au Rwanda. Deux ans après (décembre 1996-décembre 1998)*, Kigali, 1998, p. 20-21.

<sup>106</sup> *Gacaca* (pronunciar «gachacha») significa hierba, una referencia a la hierba en la que estaban sentados los que trataban de arreglar los litigios entre vecinos.



asesinato de religiosos, entre ellos varios obispos, perpetrado en 1994 en Gakurazo, no es más que un pretexto falso para calmar el TPIR. Por otra parte, el gobierno considera que reclamar justicia para los crímenes del FPR es una forma de negación del genocidio.

En el año 2002, Ruanda lanza una gigantesca experiencia de justicia transicional, con la ambición de «perseguir judicialmente a casi toda la nación»<sup>107</sup>. En 1999, una comisión había propuesto establecer tribunales *gacaca*. A principios de 2001, el Parlamento adopta una ley sobre la creación, organización y competencias de las jurisdicciones *gacaca*, cuyo preámbulo esboza cinco objetivos: establecer la verdad, acelerar los procedimientos; erradicar la cultura de la impunidad; castigar a los culpables; reconciliar a los ruandeses y reforzar su unidad; por fin, demostrar la capacidad de la sociedad ruandesa para arreglar sus propios problemas apoyándose en sus tradiciones.

El sistema es muy descentralizado: en total, más de diez mil jurisdicciones son creadas en los niveles de células, sectores, municipios y prefecturas. Esta justicia debe ser dictada por los *inyangamugayo*, personas de «alta integridad» elegidas, sin formación jurídica. Aunque la ley hace referencia a la tradición, el sistema no tiene nada de tradicional, salvo su nombre y su encaje local. En realidad, es estatal y moderno, ya que el derecho oficial (no consuetudinario) debe ser aplicado y las instituciones del Estado, entre ellas el ministerio fiscal, juegan una función central en el sistema. Durante los procesos, los observadores gubernamentales velan para que cada actor se comporte según el guión establecido por las autoridades; comportamiento inducido también por la presencia de policías y militares. Además, el nuevo *gacaca* es retributivo o punitivo, no reparador como el antiguo. Las gentes lo comprenden perfectamente y distinguen entre *gacaca ya leta* («gacaca del Estado») y *gacaca ya keera* («gacaca de antaño»).

Tras la elección de los jueces en octubre de 2001, se organizó una fase piloto de 2002 a 2004, y las jurisdicciones *gacaca* comienzan a funcionar a escala nacional en 2005. Rápidamente se formulan dos tipos de críticas. Por un lado, las preocupaciones se centran en la imprecisa separación entre diligencias judiciales y juicios, la ausencia de asistencia judicial, la motivación sumaria de las sentencias, el peligro de la auto-incriminación, así como la fragilidad de las pruebas y la variabilidad de las penas en función de múltiples causas locales. Por otra parte, el entorno político y social ruandés es percibido como una ame-

---

<sup>107</sup> L. Waldorf, «Mass Justice for Mass Atrocity: Rethinking Local Justice as Transitional Justice», *Temple Law Review*, vol. 79. n.º 1, 2006, p. 3.

naza para la buena administración de la justicia: la libertad de expresión es limitada, poner en cuestión abiertamente la «verdad» del régimen es arriesgado, y las relaciones en el ámbito local están basadas en el miedo y la desconfianza. Además, el gobierno deja perfectamente claro que los crímenes cometidos por el APR no pueden ser tratados por los *gacaca*.

Cuando termina el proceso en junio de 2012, el Servicio nacional de las jurisdicciones *gacaca* (SNJG) informa que han sido tratados 1.958.643 casos y que 1.003.227 sospechosos han sido juzgados por diferentes tipos de crímenes y delitos. Las absoluciones han alcanzado al 14% de los casos<sup>108</sup>. Admitiendo que esta estadística pueda ser aplicada a los sospechosos, lo que no es seguro, se podría decir que en torno a 900.000 personas fueron condenadas. Este número corresponde a más del 50% de los hombres hutu adultos en 1994; de este modo se concluye en una criminalización colectiva de una etnia<sup>109</sup>.

Los *gacaca*, al tratarse de una experiencia única en materia de justicia transicional, han sido objeto de numerosos estudios que hacen aparecer defectos fundamentales. El primero está ligado a la noción de verdad que se inscribe en un contexto doblemente desfavorable. Por un lado, los ruandeses comunican de manera estratégica: lo que cuenta no es tanto la «verdad» en sentido occidental, sino más bien la utilidad de lo que es dicho en un contexto peligroso y complejo<sup>110</sup>. Por otro lado, el gobierno decreta lo que es verdadero, y esta verdad oficial es ampliamente difundida por numerosos medios, incluyendo el mundo rural. Los participantes en los *gacaca* dicen a menudo mentiras o medio-verdades; los silencios y las omisiones están omnipresentes<sup>111</sup>. La falta de verdad ha tenido repercusiones comprensibles en un segundo problema, el de la confianza. Lars Waldorf, especialista en derechos humanos, señala que los procesos *gacaca* han acentuado el deterioro en las relaciones interétnicas e incluso piensa que han aniquilado cualquier esperanza de promover la reconciliación. Llama la atención sobre el riesgo

---

<sup>108</sup> El informe no suministra indicaciones con relación a los sospechosos. En efecto, hay casos que pueden concernir a varios sospechosos, del mismo modo que un mismo sospechoso puede estar implicado en varios casos. La cifra citada arriba muestra que el número de casos es casi el doble que el número de sospechosos.

<sup>109</sup> Sentimiento reforzado cuando en junio de 2013, el presidente Kagame invita a todos los hutu a «pedir perdón por los que han matado en su nombre».

<sup>110</sup> Ver C.M. Overdulve, «Fonction de la langue et de la communication au Rwanda», *Nouvelle Revue de science missionnaire*, vol. 53, 1997, p. 271-283.

<sup>111</sup> Ver sobre este tema B. Ingelaere, Does the truth pass across the fire without burning? Locating the short circuit in Rwanda's *gacaca* courts», *Journal of Modern African Studies*, vol. 47, n.º 4, 2009.

de imponer una culpabilidad colectiva al conjunto de los hutu, fenómeno ya apuntado anteriormente<sup>112</sup>.

El control estatal es otro rasgo señalado por los analistas. Según Susan Thomson, especialista en el estudio de los conflictos y de los procesos de paz, el poder impone una visión particular de la justicia y de la reconciliación priorizando la visión del gobierno en detrimento de los procesos individuales de reconciliación. Para numerosos ruandeses, los tribunales *gacaca* representan una forma de control estatal de sus vidas, algo que genera miedo e inseguridad y no unidad y reconciliación<sup>113</sup>. Esta percepción explica un cuarto problema, el de la participación. La «justicia popular impopular» no atrae a mucha gente, porque los *gacaca* se han impuesto desde arriba por un régimen autoritario y los campesinos necesitan todo su tiempo para cultivar sus campos y tanto los hutu como los tutsi temen las potenciales consecuencias de este proceso en sus futuras relaciones cotidianas. La débil participación empuja al gobierno a la coerción, reforzada en 2004 cuando la presencia en los procesos *gacaca* se hace obligatoria en el ámbito de las células.

Numerosos investigadores, que han llevado a cabo minuciosas encuestas sobre el terreno, tienden a pensar que en general los *gacaca* no han aportado ni justicia, ni verdad, ni reconciliación. Antes al contrario: señalan los riesgos considerables para el futuro de un proceso que no ha logrado instaurar el estado de derecho y una paz duradera. Este peligro ha quedado además reforzado por la práctica de una justicia de vencedores que ha otorgado la impunidad a los miembros del FPR sospechosos de crímenes graves. No obstante, ello no significa que la experiencia de los *gacaca* haya sido solo negativa. El antropólogo Bert Ingelaere muestra hasta qué punto este procedimiento se inscribe en las dinámicas sociales y políticas locales, diferentes de un lugar a otro. No hay, pues, una experiencia única, sino múltiples experiencias, tan numerosas como colinas existen en Ruanda<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> L. Waldorf, «Mass Justice», op. cit.

<sup>113</sup> S. Thomson, «The darker side», art. citado; S. Thomson, *Whispering truth to power: The everyday resistance of Rwandan peasants to post-genocide reconciliation*, *African Affairs*, vol. 110, n.º 440, 2011, p. 439-456.

<sup>114</sup> B. Ingelaere, *Inside Rwanda's gacaca courts. Seeking justice after genocide*, Madison, University of Wisconsin Press, 2016. Para una evaluación más positiva de los procedimientos *gacaca*, ver P. Clark, *The Gacaca Courts. Post-genocide justice and reconciliation in Rwanda. Justice without lawyers*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

### *El Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR)*

El TPIR es creado el 8 de noviembre de 1994 por la resolución 995 del Consejo de seguridad de la ONU para juzgar a las personas responsables de actos de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda o por ciudadanos ruandeses en territorios de los Estados vecinos, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. Comienza a funcionar efectivamente en Arusha, Tanzania, a mediados del 1995. Ya desde su comienzo, el tribunal da pruebas de numerosos incumplimientos y éstos lo van a atormentar hasta su cierre a finales de 2015 (si bien sus trabajos deberían haber terminado en diciembre de 2008). Está en primer lugar la extrema lentitud de los procedimientos que lo caracteriza. Las primeras sentencias no son dictadas más que en 1998, tres años después del inicio de los trabajos. De esas tres sentencias, dos son pronunciadas tras breves y simples procesos, siguiendo los alegatos de culpabilidad. Una de las consecuencias de la lentitud del TPIR es que los sospechosos pasan largos periodos de detención preventiva. Caso extremo: entre su detención en 1995 y su juicio en primera instancia, el antiguo alcalde de Ngoma (cabeza de distrito de la prefectura de Butare) Joseph Kanyabashi pasa dieciséis años en la cárcel, e incluso más de veinte años hasta la decisión final en apelación.

La política de las diligencias judiciales es un segundo problema. Particularmente, al comienzo de los trabajos, la fiscalía detiene a todos los sospechosos que puede encontrar. Los esfuerzos desplegados por la caza al «pescado pequeño» retrasan considerablemente la persecución de sospechosos situados en lo alto de la jerarquía del genocidio. La calidad de las acusaciones es mediocre lo mismo que la gestión de las pruebas. La fiabilidad de los testimonios cruciales en procesos que se basan en el establecimiento de los hechos y en los que las pruebas documentales son escasas, es el tendón de Aquiles del fiscal y, en consecuencia, del tribunal. La manera como los ruandeses se comunican ya ha sido evocada a propósito de los tribunales *gacaca* y testigos, sobre todo de cargo, mienten bajo juramento. En varias ocasiones, organizaciones de denuncia montadas por *Ibuka* y por autoridades judiciales y administrativas ruandesas son puestas de relieve por las defensas y en un cierto número de casos reconocidas.

En realidad, la oficina de la fiscalía parece, sin embargo, más deseosa de obtener condenas que de descubrir la verdad. Un testigo cuenta que ha recibido a investigadores del tribunal: «en lugar de buscar que yo manifieste la verdad, no buscan más que elementos de

cargo<sup>115</sup>». En el marco del procedimiento en apelación del primer proceso del TPIR, el del alcalde Akayezu, un testigo explica detalladamente que numerosos testimonios han sido fabricados. El fiscal debería haberse preocupado al menos de la posibilidad de que varios de sus testigos hubieran mentido deliberadamente, pero nada hizo al respecto. En cuanto a la sala de apelación, habría debido proceder a una somera verificación de la alegación de este testigo, en vez de declarar, sin examinar, que el testigo no aportaba nada nuevo y que la revisión de proceso no era necesaria.

El defecto principal del tribunal está en su transformación en un instrumento de la justicia de los vencedores. En abril de 2002, la fiscal Carla Del Ponte anuncia que espera lanzar autos de acusación contra sospechosos del FPR antes de fin de año. El régimen ruandés reacciona saboteando los trabajos del tribunal: el personal de la oficina de la fiscalía en Kigali es amenazado, se impide que los testigos vayan a Arusha, el fiscal general ruandés pone en cuestión la utilidad del TPIR y rechaza cualquier idea de persecución judicial de sospechosos del FPR. A finales de 2002, el gobierno ruandés decide que Del Ponte debía marcharse y aumenta la presión. Anuncia a finales de noviembre que Del Ponte «ha perdido la autoridad moral para perseguir casos con relación al genocidio» y pide que sea sustituida. En la primavera de 2003, el equipo «Enquêtes spéciales» de la oficina de la fiscalía documenta detalladamente una quincena de masacres cometidas por el FPR, de las que cuatro están preparadas para convertirse en autos de acusación; los crímenes cometidos están detallados, los sospechosos son conocidos, las pruebas, concretamente de testigos, están disponibles. En julio, la oficina de la fiscalía afirma que Ruanda ejerce presiones sobre el Consejo de seguridad de la ONU para que el mandato de Del Ponte, que expira en septiembre, no sea renovado. Según la portavoz de esta última, «el objetivo es impedir que la fiscal investigue los crímenes que pudieron cometer los miembros del FPR<sup>116</sup>». El Consejo de Seguridad, fuertemente impulsado por dos grandes aliados de Kigali, los Estados Unidos y el Reino Unido, decide mantener a Del Ponte en sus funciones ante el Tribunal penal internacional para la ex-Yugoslavia, pero nombra un fiscal distinto para el TPIR.

El nuevo fiscal, el gambiano Hassan Jallof, garantizará la inmunidad total del FPR, a pesar de que uno de los jueces del tribunal afirmara

---

<sup>115</sup> T. Cruvelier, *Le Tribunal des vaincus. Un Nuremberg pour le Rwanda?*, Paris, Calmann-Lévy, 2006, p. 209.

<sup>116</sup> «Ruanda quiere eliminar a la Sra. Del Ponte de su puesto de fiscal (portavoz), La Haya, AFP, 24 de julio de 2003.

en 2002 que «hay pruebas considerables que muestran que un gran número de crímenes han sido cometidos por el FPR, cuyos líderes ocupan hoy posiciones clave en el gobierno<sup>117</sup>». Ante las preguntas que le son formuladas por la prensa, Jallof gana tiempo afirmando que examina las pruebas antes de decidir si va a inculpar o no a elementos del FPR. Mantiene esta línea hasta el cierre de los trabajos del tribunal. La colusión entre Jallof y el gobierno ruandés aparece a pleno día cuando transfiere el dossier de un asunto que implica a militares del APR en la masacre de una docena de eclesiásticos en junio de 1994. Contrariamente a la promesa de Jallof, son juzgados por asesinato y no por crimen de guerra. Como consecuencia de esteseudoproceso, dos oficiales superiores son absueltos y dos capitanes (que se auto-inculpan) son condenados a penas ligeras. En junio de 2009, Jallof declara en el Consejo de Seguridad que «en esta etapa del proceso, su oficina no tiene ninguna inculpación que concierna a las alegaciones contra el FPR<sup>118</sup>». Los procesos son imposibles si el fiscal rehúsa inculpar. Jallof carga, por lo tanto, con una responsabilidad histórica en el fracaso de la justicia internacional. El periodista Thierry Cruvelier, observador durante mucho tiempo de los trabajos del TPIR, concluye que los dirigentes ruandeses «se han garantizado que el tribunal de Arusha sería la sombra encorvada y vergonzosa de un mundo que había fallado, no un obstáculo ilegítimo a una victoria que han querido obtener sin compartir»<sup>119</sup>.

Al culminar sus trabajos en 2015, el tribunal ha condenado a 61 personas y ha absuelto a 14. Ocho inculpados no han podido ser atrapados. El coste ha sido considerable: evaluado en 1.800 millones de dólares para 75 inculpados juzgados, lo que viene a ser 24 millones de dólares por persona.

A pesar de sus defectos, el TPIR ha contribuido al desarrollo del derecho penal internacional, más allá del caso de Ruanda. Es el primer tribunal internacional que ha perseguido y condenado a sospechosos por genocidio, dando así «vida a la convención del genocidio por primera vez desde su adopción<sup>120</sup>». Ha contribuido igualmente a clarificar algunas normas de derecho internacional humanitario, concretamente sobre el importante punto planteado al inicio de este libro. En la medida en que comparten lengua y cultura, los hutu y los tutsi no son grupos

<sup>117</sup> «Judge Yakov Ostrosky criticisms of ICTR», Arusha, Interviews, 15.05.2002.

<sup>118</sup> Naciones Unidas, Consejo de seguridad, PV 134.<sup>a</sup> reunión, 4 de junio de 2009, S/PV.6134, p. 33.

<sup>119</sup> T. Cruvelier, *Le Tribunal des vaincus...*, op. cit., p. 250.

<sup>120</sup> K. C. Moghalu, *Rwanda's Genocide. The Politics of global justice*, New York et Houndmilles, Palgrave MacMillan, 2005, p. 202.

étnicos en el estricto sentido del término, lo cual habría podido impedir calificar de genocidio los crímenes cometidos en Ruanda. En su primera sentencia, el tribunal afirma que «existe un cierto número de factores objetivos que hacen de este grupo (tutsi) una entidad dotada de una identidad distinta (...) Existían además en Ruanda reglas de derecho consuetudinario que regulaban la determinación del grupo étnico sobre la base de la ascendencia patrilineal. La identificación de las personas como pertenecientes al grupo hutu o tutsi (o twa) se había convertido de ese modo en una parte integrante de la cultura ruandesa (...) Los tutsi, por añadidura, eran percibidos como formando parte de un grupo étnico distinto por los que los tomaban como blanco para matarlos<sup>121</sup>». La misma sentencia innova estableciendo que la violación puede ser un arma del crimen de genocidio: «La violencia sexual era una etapa en el proceso de destrucción del grupo tutsi, destrucción de su moral, de la voluntad de vivir de sus miembros, y de sus vidas mismas (...) En ese sentido, aparece claramente a la Sala que las violaciones y violencias sexuales correspondían, al mismo nivel que otros atentados graves contra la integridad física y mental cometidos contra los tutsi, a la voluntad de hacer sufrir y mutilar a los tutsi antes de matarlos, con el designio de destruir el grupo tutsi haciendo sufrir terriblemente a sus miembros<sup>122</sup>».

### *Justicia en terceros países*

Abordamos muy someramente los procesos que han tenido lugar en países terceros en virtud del principio de la competencia universal, que permite juzgar a los sospechosos, incluso si los crímenes han sido cometidos en el extranjero, incluso si los autores son extranjeros e incluso si las víctimas nos son de la nacionalidad del país donde los procedimientos judiciales tienen lugar. Esta competencia solo tiene relación con crímenes graves, en particular crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Suiza es el primer país en perseguir, juzgar y condenar a un sospechoso ruandés. El 30 de abril de 1999, un tribunal militar condena a cadena perpetua a un antiguo alcalde por asesinato, incitación al asesinato y crímenes de guerra. En Bélgica, en 2001, 2005 y 2007, tienen lugar procesos ante el tribunal de lo criminal, contra siete inculpados que cargan con penas de doce a veinte años de reclusión. En Francia,

<sup>121</sup> El fiscal contra Jean-Paul Akayezu, n.º ICTR-96-4-T, juicio del 2 de septiembre de 1998, pár. 170-171.

<sup>122</sup> *Ibid.*, 732-733.

se abre una instrucción en 1999, pero los procedimientos avanzan tan poco que Francia es condenada por la Corte Europea de Derechos Humanos por lentitud. El sospechoso se beneficiará posteriormente de un sobreseimiento. Sin embargo, en 2014, se celebra un primer proceso contra un sospechoso que es condenado a veinticinco años de reclusión, y un segundo en 2016 contra dos antiguos alcaldes, condenados a cadena perpetua. Un puñado de otros sospechosos es juzgado en los Países Bajos, Canadá, Noruega, Suecia y Finlandia.

Esta justicia tiene algo en común con la practicada en Ruanda y ante el TPIR, y es que los acusados son juzgados en el marco del genocidio, mientras que ningún sospechoso del FPR es inquietado. Una instrucción que avanza en Francia no concierne los crímenes internacionales cometidos por el FPR, sino solamente el atentado contra el avión presidencial ruandés del 6 de abril de 1994, en el que miembros franceses de la tripulación encontraron la muerte. Los nueve sospechosos del FPR son susceptibles de ser perseguidos por asesinatos, organización terrorista y asociación de malhechores. En España, 40 oficiales del ejército ruandés son inculcados ante la Audiencia Nacional en febrero de 2008 y se han dictado mandatos de arresto internacional contra ellos, concretamente por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Ruanda y en la República Democrática del Congo, así como por el asesinato de súbditos españoles. Sin embargo, en octubre de 2015, el Tribunal Supremo español suspende las persecuciones judiciales en razón a una ley de 2014 que reduce considerablemente el alcance de la competencia universal.

## 2. La gran guerra africana

A pesar de sus inmensas consecuencias, abordamos aquí solo someramente una importante secuela del genocidio y de la guerra civil en Ruanda<sup>123</sup>. Cerca de 2 millones de ruandeses, principalmente hutu, huyen del país frente a la guerra y la progresión del FPR, que termina por ocupar el conjunto del territorio en julio de 1994 (a excepción de la zona al suroeste donde la operación Turquoise continúa hasta el 22 de agosto). Un millón y medio de estos refugiados, entre ellos miembros de las FAR y milicianos, se amontonan en los campos de refugiados en el Zaire (que en 1997 tomará el nombre de República Democrática del

---

<sup>123</sup> Para más detalles, ver F. Reyntjens, *La Grande Guerre africaine. Instabilité, violence et déclin de l'Etat en Afrique centrale*, Paris, Les belles Lettres, 2012.



Congo), cerca de la frontera ruandesa. Los elementos armados que están entre los refugiados utilizan los «santuarios humanitarios» como base de asalto y repliegue desde donde lanzan operaciones contra Ruanda. En 1996 preparan una invasión de envergadura y el gobierno ruandés advierte en varias ocasiones a la comunidad internacional que esta amenaza no puede ser tolerada y que, si nada se hace para terminar con esta situación, el ejército ruandés se ocupará de ello. Es lo que hace a partir de septiembre de 1996.

A fin de evitar dar la impresión de que invade el Zaire, lo que constituiría una patente violación del derecho internacional, Ruanda se oculta detrás de la rebelión de los Banyamulenge, un grupo tutsi de origen ruandés instalado desde hace generaciones en Zaire y de un movimiento rebelde creado totalmente en Kigali, La Alianza de las Fuerzas Democráticas por la Liberación del Congo-Zaire (AFDL). Si bien es cierto que estos dos componentes poseen elementos armados activos sobre el terreno, en realidad es el APR quien pasa masivamente la frontera. Los campos de refugiados son atacados con armas pesadas, cientos de miles de refugiados regresan, en parte voluntariamente, en parte forzosa-mente, a Ruanda, mientras otros cientos de miles huyen hacia el oeste ante el avance del APR. Comienza una carnicería en cuyo transcurso el APR masacra a decenas, incluso centenares de miles de refugiados civiles. Durante esta campaña de exterminio, bien documentada, fueron cometidos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a gran escala. El informe más completo evoca incluso la posibilidad de que se cometiera un genocidio: «Varios incidentes recogidos en el presente informe revelan circunstancias y hechos a partir de los cuales un tribunal podría sacar consecuencias sobre la intención de destruir en parte el grupo étnico hutu en República Democrática del Congo, si son establecidos fuera de cualquier duda razonable<sup>124</sup>».

En mayo de 1997, Laurent Kabila, líder de la AFDL, toma el poder en Kinshasa, gracias al apoyo de una gran coalición regional. Pero rompe con sus aliados ruandeses y ugandeses, los cuales lanzan una nueva «rebelión» en agosto de 1998. Un movimiento armado congoleño es creado nuevamente en Kigali, el Reagrupamiento congoleño por la democracia (RCD). Uganda, por su parte, apoya el Movimiento de liberación del Congo (MLC). Que esta nueva guerra no sea una sim-

---

<sup>124</sup> Alto Comisariado de la Naciones Unidas para los derechos humanos, République démocratique du Congo, 1993-2003, *Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mai 1993 et 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo*, 2010, p. 514.

ple repetición de la primera es debido a que se ha producido un espectacular cambio de alianzas. Los aliados de ayer se convierten en adversarios hoy. Los que habían hecho causa común con Ruanda y Uganda en 1996-1997, sobre todo Angola y Zimbabue, giran contra sus antiguos aliados e impiden la caída de Kabila. La guerra no termina formalmente más que en 2003, como consecuencia de diversos acuerdos de paz y acuerdos políticos. El este de la República Democrática del Congo, no obstante, permanece inestable; el Estado congoleño tiene grandes dificultades para el control territorial de esta región, que sigue siendo el teatro de la explotación ilegal de recursos naturales y de masivas violaciones de los derechos humanos.

Así pues, las metástasis del genocidio de 1994 han superado las fronteras del territorio ruandés. Han desembocado en una recomposición política, económica y de seguridad de toda la región de los Grandes Lagos, e incluso más allá. En un momento dado, en particular en 1998, una decena de países estaban implicados en el conflicto, que, por esta razón, ha sido calificado como «la primera guerra mundial africana».

### 3. Verdad histórica y relaciones étnicas

Solo a finales de los años 1960, la investigación académica cesó de considerar, por un lado, que los tutsi y los hutu formaban entidades homogéneas y, por otro, que los primeros habrían ejercido un dominio multiseccular y uniforme sobre los segundos; una visión que los primeros observadores de Ruanda habían mantenido ampliamente. Este nuevo enfoque histórico se interesó en efecto por la diversidad, en el tiempo y en el espacio, de las relaciones entre hutu y tutsi, y mostró cómo desde el siglo XIX, las evoluciones políticas dieron diversas significaciones al criterio de pertenencia étnica. Queda por decir que estos trabajos quedan circunscritos a los medios de especialistas. En efecto, desde finales de los años 1950, no ha existido una historia públicamente desapasionada de las relaciones entre tutsi y hutu en Ruanda. Políticos e ideólogos se han apoderado de ella regularmente para justificar sus programas.

Así, cuando, a finales de los años 1950, comienzan las tensiones políticas entre líderes hutu y tutsi, las dos partes recurren a relatos históricos encargados de fundamentar sus posiciones. Los primeros hacen de la lucha contra «el feudalismo» el cimiento de su unidad, de tal modo que, durante la 1.<sup>a</sup> república, la denuncia sistemática de los tutsi permanece siendo un tema constante de los discursos y cánticos del Parmehutu. Estas estigmatizaciones son retomadas con extrema violencia en las diatri-

bas públicas de algunos políticos y en la mayoría de los nuevos medios a partir de los años 1990. En cuanto a los notables tutsi, expresan su opinión en 1958. En el marco del Consejo superior del país, denuncian las declaraciones de los líderes hutu: éstos seguirían influencias extranjeras nefastas y sólo buscarían la división del país «cuya unión nacional data de nueve siglos». Los miembros del Consejo votan una moción mayoritaria: «insistir ante el gobierno para que sean tachados de todos los documentos oficiales los términos bahutu, batutsi, batwa<sup>125</sup>». La propuesta es denunciada por los políticos hutu que juzgan que se trata de una maniobra gracias a la cual, al borrar el criterio étnico de las estadísticas, quedaría enmascarada la realidad del monopolio de los tutsi en el terreno de la economía, administración y educación.

Tras el genocidio, el FPR suprime las menciones étnicas en los documentos de identidad; algo perfectamente comprensible cuando se sabe que la mención «tutsi» significaba la muerte. Sin embargo, el poder quiere que esta supresión no sea solamente administrativa: busca hacer prevalecer una historia oficial que atribuye la división étnica al colonizador, una división que no habría existido en el Ruanda pre-colonial. Según esta *doxa*, el FPR, al poner término al genocidio resultante de esta división, restauró la paz y la armonía que reinaba en el pasado<sup>126</sup>. No es permitido poner en duda esta *doxa*. Así, con ocasión de un debate universitario en Kigali en 2004, un especialista mencionó el valor de las diferentes «verdades». Un alto responsable presente entre el público exigió inmediatamente una rectificación: «No hay más que una verdad y nosotros la conocemos<sup>127</sup>». Del mismo modo, el objetivo declarado de un congreso organizado en Kigali en julio de 2008 es, «por una parte, observar el fracaso de las ciencias humanas y sociales que ha conducido al genocidio<sup>128</sup>, y, por otra parte, dar con nuevas fuentes para las ciencias humanas sociales gracias a los esfuerzos de los ruandeses». Es necesaria «una nueva metodología, una nueva literatura, una nueva historia<sup>129</sup>».

<sup>125</sup> *Rwanda Politique* (159-1960), Bruxelles, «Les dossiers du CRISP», 1961, p. 37.

<sup>126</sup> Para un resumen de la lectura gubernamental de la historia, ver S. Buckcley-Zistel, «Nation, narration, unification) The politics of history teaching after Rwandan genocide», *Journal of Genocide Research*, vol. 11, n.º 1, p. 33-38.

<sup>127</sup> Human Rights Watch, *La Loi et la Réalité. Les progrès de la réforme judiciaire au Rwanda*, New York, 2008, p. 38.

<sup>128</sup> Nótese que los investigadores, al menos los que no se adhieren a las tesis del FPR, son considerados de este modo corresponsables del genocidio.

<sup>129</sup> « Rwanda: apprendre de l'expérience du génocide rwandais », Kigali, Agence rwandaise d'informations, 23 juillet 2008 (cursivas añadidas).

Uno de los aspectos de esta verdad única sirve a un objetivo concreto. Es, en efecto, un elemento esencial de la estrategia hegemónica del segmento de la elite tutsi que está en el poder. La afirmación de que no existe «ni hutu, ni tutsi, sino ruandeses» permite disimular la dominación política, económica y militar de esta pequeña elite. Andréa Purdeková señala que el marco discursivo del proyecto de desetnización «no hace sino enmascarar la imposición desde arriba, los límites estrechamente vigilados y la naturaleza autoritaria del discurso»<sup>130</sup>. La unidad, la reconciliación, la verdad, no son compartidas, sino decretadas, y el FPR intenta, en consecuencia, fabricar una unidad sin reconciliación y sin permitir un espacio nacional y público donde la cuestión pueda ser abordada.

A pesar de todos los esfuerzos del régimen, numerosos estudios muestran que la etnicidad sigue siendo un factor importante en la identidad social ruandesa, y que las distinciones entre hutu y tutsi permanecen reconocidas y actuantes<sup>131</sup>. Del mismo modo, un reportero del *New York Times* constata que en la universidad nacional «la etnicidad sigue siendo un elemento inevitable del proceso de paso a la edad adulta», y que el gobierno «no ha logrado hasta ahora más que enterrar las tensiones étnicas bajo una capa superficial»<sup>132</sup>. No obstante, James Scott ha mostrado que, paralelamente a la «transcripción pública» (*public transcript*) de los poderosos, en este caso el FPR, los que están desprovistos de poder —en este caso la mayoría de los hutu e igualmente numerosos tutsi— desarrollan una «transcripción oculta» (*hidden transcript*)<sup>133</sup>. Esta lectura disidente de la historia, de la verdad y de la reconciliación es invisible, porque está prohibida por la ley y es combatida activamente por el poder, pero está muy presente en la mente de la gente y en los intercambios privados, como lo muestran numerosas investigaciones sobre el terreno. Estos relatos disidentes adoptan la forma de contra-historia a veces radical (que hasta llega al negacionismo) que se enfrenta a la decretada por el régimen. La criminalización de esta «otra historia» no hace sino contribuir a las frustraciones, a los resentimientos y a la cólera; produce la violencia estructural tan extendida hoy en Ruanda.

---

<sup>130</sup> A. Purdeková, *Repatriation and Reconciliation in Divided Societies: The case of Rwanda's «Ingando»*, Oxford, RSC Working Paper n.º 43, 2008, p. 3.

<sup>131</sup> Ver, por ejemplo, B. Ingelaere, «Peasants, power and ethnicity: A bottom-up perspective on Rwanda's political transition», *African Affairs*, vol. 109, n.º 435, 2010, p. 275.

<sup>132</sup> J. Kron, «For Rwandan Students, ethnic tensions lurk», *The New York Times*, 16.06.2010.

<sup>133</sup> J. Scott, *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*, New Haven, Yale University Press, 1992.

## Conclusión

El genocidio de los tutsi ruandeses es único por la manera como sus iniciadores supieron movilizar una participación masiva en la perpetración del crimen. No ocultaron sus intenciones sino que, al contrario, las expusieron abiertamente por medio de los llamamientos a las masacres, por la utilización de canciones y medios de propaganda, por las matanzas a pleno día que dejaban los cuerpos de las víctimas a la vista de todos. Todos los hutu fueron llamados a unirse a la carnicería «que concierne a todo el mundo». Los reacios fueron obligados a renunciar a su resistencia, e incluso a participar ellos mismos en las matanzas. El miedo fue un instrumento poderoso, miedo al FPR y, por extensión, miedo a los tutsi, «aliados naturales» de FPR. Este miedo se transformó en odio. Así se creó una situación en la que los autores de los crímenes se funden en la masa y se convierten en anónimos, tratando de evitar cualquier responsabilidad individual. En estas condiciones, se comprende por qué el genocidio no solamente fue terriblemente eficaz sino, igualmente, extremadamente rápido. En unas semanas, cientos de miles de tutsi encuentran la muerte. Las veleidades de los opositores fueron combatidas sistemáticamente. No obstante, numerosos testimonios provenientes de supervivientes atestiguan que sobrevivieron gracias a la ayuda de hutu que conocían o que les eran desconocidos.

El exterminio de los tutsi en Ruanda corresponde perfectamente a la definición adoptada por la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio. Por una decisión del 16 de mayo de 2006, la sala de apelación del TPIR decide que el genocidio de los tutsi es un hecho que se inscribe en la historia del mundo y que es de notoriedad pública. Ordena, por consiguiente, a la sala de primera instancia a levantar acta judicial<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> Asunto Karemera *et alii*; decisión tras la apelación interlocutoria interpuesta por el fiscal con relación a la decisión relativa al acta judicial, 16 de junio de 2006.

Según una fórmula célebre, el historiador Pierre Vidal-Naquet trataba de «asesinos de la memoria» a «los negacionistas de la Shoah<sup>135</sup>». Asesinos semejantes existen igualmente en el caso del genocidio tutsi: algunos niegan la realidad de este hecho histórico o promueven la tesis del «doble genocidio». Entre ellos, evidentemente, los que están reclamados a explicarse ante la justicia e incluso algunos de sus abogados<sup>136</sup>, pero igualmente hombres políticos ruandeses y extranjeros<sup>137</sup>, así como numerosos intervinientes en las redes sociales<sup>138</sup>.

Se trata, sin embargo, de no caer en el otro defecto, el de considerar el genocidio y las masacres en Ruanda como una historia de buenos y malos. La realidad es que se trata de una historia de malvados, de los dos campos político-militares opuestos, uno, que recurre a la violencia masiva para salvaguardar el poder, el otro, para conquistarlo. El combate contra el negacionismo se ha hecho más difícil por la manera como esta acusación se ha convertido en arma política. En efecto, el FPR y sus voceros en el extranjero, califican a menudo de «negacionistas» incluso a quienes siempre han afirmado la realidad de genocidio de los tutsi pero son críticos con el régimen de Kigali o denuncian sus crímenes tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo. Así, un informe del senado ruandés considera como proveniente de la ideología genocida la evocación de los «crímenes del FPR impunes» o «la crítica política partidaria e injusta<sup>139</sup>». Sin embargo, el trabajo permanente de crítica histórica siempre se revela legítimo y ne-

---

<sup>135</sup> P. Vidal-Naquet, *Les Assassins de la mémoire. « Un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionisme*, Paris, La Découverte, 2005.

<sup>136</sup> Así, después de que el TPIR absolviera a oficiales del cargo de alianza (entente) para cometer genocidio, el abogado de uno de ellos escribe un artículo argumentando que al no haberse probado la planificación del genocidio, el genocidio ya no existe: P. Erlinder, Rwanda: No Conspiracy, No Genocide Planning... No Genocide?», *The Jurist*, 24 diciembre 2008. Ahora bien, hemos visto que el genocidio no requiere la planificación, sino la intención, y ésta ha quedado bien probada.

<sup>137</sup> En noviembre de 1994, en una cumbre franco-africana en Biarritz, el presidente Mitterrand evoca «la guerra civil y los genocidios que siguieron» (conferencia de jefes de Estado de Francia y África, discurso del presidente de la República, Sr. François Mitterrand, en la solemne sesión de apertura, Biarritz, 8 de noviembre de 1994, citado por O. Lanotte, *La France et le Rwanda...*, op. cit., p. 310, nota 149. Del mismo modo, el subtítulo de un libro publicado por un antiguo ministro francés de Cooperación evoca «genocidios» en plural: B. Debré, *Le retour du Mwami. La vraie histoire des génocides rwandais*, Paris, Ramsay, 1998.

<sup>138</sup> Sobre el negacionismo del genocidio de los tutsi, ver R. Moerland, *The Killing of Death. Denying the genocide against the tutsi*, Cambridge, Anvers et Portland, Intersentia, 2016.

<sup>139</sup> République du Rwanda, Sénat, *Idéologie du génocide au Rwanda et stratégie de son éradication*, Kigali, 2006, p. 21.

cesario. Ahora bien, esta conducta de investigación es reprochada habitualmente a los que se preguntan sobre la historia oficial o políticamente correcta, tal y como la ha establecido el FPR, concretamente erigiendo el «divisionismo» y la «ideología genocida» en infracción. Si este modelo de censura del trabajo crítico prevaleciera en general, hubiera sido imposible, por ejemplo, reconocer la realidad de las matanzas en el Congo bajo Leopoldo II, las torturas practicadas por el ejército francés en Argelia o, todavía, la masacre de 22.000 polacos en Katyn, ordenada en 1940 por Stalin.

Sin embargo, la verdad es tan simple como trágica. Los tutsi ruandeses han sido víctimas de un genocidio perpetrado por extremistas hutu, seguidos en su empresa criminal por un número muy importante de hutus ordinarios. Por su parte, el FPR ha cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Ruanda en 1994 y, quizás, un genocidio en Zaire/Congo en 1996 y 1997. La prohibición de decir toda la verdad, incluyendo la verdad judicial, contribuye a los resentimientos y a los odios, que siguen obsesionando a Ruanda.

Después de julio de 1994, la destrucción de los tutsi fue objeto rápidamente de una mediatización mundial: se le han consagrado películas, documentales, literatura de testimonios, novelas, ensayo, obras de teatro, comics, obras fotográficas. Tal profusión atestigua el impacto suscitado por esta tragedia que se había desarrollado en un pequeño país poco conocido fuera de los medios académicos, salvo por la belleza de sus paisajes. Autores ruandeses fueron publicados, y entre ellos las mujeres tutsi supervivientes han sido numerosas en relatar las masacres y la desaparición de los suyos<sup>140</sup>.

Esta mediatización ha proseguido posteriormente. Fueron rodadas varias películas espectaculares al estilo de Hollywood, tanto por su dosis de vedetismo como por los medios utilizados, en particular: *Hotel Ruanda* de Terry George (2004), *Shooting Dogs* de Michel Caton-Jones (2005), *Sometimes in April* de Raoul Peck (2006). Reportajes y documentales fueron encargados y difundidos por cadenas de televisión de todo el mundo. Por añadidura, cada año, en el mes de abril, la conmemoración del genocidio suscita nuevos reportajes y publicaciones. Esta globalización se produce también en el interior de Ruanda. Así, Brandstetter observa que los memoriales del genocidio, son lugares simbólicos radicalmente nuevos, inscritos en un paisaje globalizado de la memoria,

---

<sup>140</sup> El universitario François Lagarde ha censado y analizado un centenar de estas obras en las que figuran entre otras los testimonios escritos por supervivientes (ellos y ellas) del genocidio: *Mémorialistes et témoins rwandais (1994-2013)*. *Bibliographie critique*, Paris, L'Harmattan, 2013.

«donde la estética de la modernidad es plenamente visibles». El Memorial de Kigali «parece mostrar el cosmopolitismo de la elite en el poder y su familiaridad con las prácticas globalizadas de conmemoración».<sup>141</sup>

En cuanto a la investigación académica, no ha cesado de desarrollarse. Las investigaciones sobre el terreno se han convertido en el enfoque privilegiado para sucesivas oleadas de investigadores internacionales y ruandeses. El resultado es una ganancia de conocimientos renovados, por lo tanto, un acceso a la complejidad que favorece la toma de distancia con relación a las explicaciones y relatos parciales y partidistas.

---

<sup>141</sup> A.- Brandstetter, *Contested pasts: the Politics of Remembrance in Post-Genocide Rwanda*, Wasenaar: NIAS, Ortelius Lecture n.º 6, 2010, p. 12.



# Abreviaturas

AFDL	Alianza de fuerzas democráticas para la liberación de Zaire-Congo.
ANT	Asamblea nacional de transición.
APR	Ejército patriótico ruandés.
CDR	Coalición por la defensa de la República.
FAR	Fuerzas armadas ruandesas.
FPR	Frente patriótico ruandés.
GTBE	Gobierno de transición de base amplia.
HCR	Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (AcNUR).
MDR	Movimiento democrático republicano.
MINUAR	Misión de las Naciones Unidas para asistencia de Ruanda.
MLC	Movimiento de liberación del Congo.
MRND	Movimiento revolucionario nacional para el desarrollo.
NRA	Ejército de resistencia nacional (Uganda).
Parmehutu	Partido del movimiento de emancipación hutu.
PDC	Partido demócrata cristiano.
PDD	Presidential Decision Directive (EE.UU.).
PL	Partido liberal.
PSD	Partido social-demócrata.
RCD	Agrupación congoleña para la democracia.
RDC	República democrática del Congo.
RTL	Radio-televisión libre mil colinas.
SNJG	Servicio nacional de las jurisdicciones gacaca.
TPIR	Tribunal penal internacional para Ruanda.
UNAR	Unión nacional ruandesa.



# Cronología

- 1860-1895 Reinado de mwami (rey) Kigeri IV Rwabugiri.
- 1896 Ruanda, bajo protección alemana.
- 1916 Inicio de la ocupación belga.
- 1924 La Sociedad de las Naciones confía a Bélgica un mandato sobre Ruanda-Urundi.
- 1930 Las funciones políticas, administrativas y judiciales «indígenas», reservadas a los tutsi.
- 1946 ONU confía a Bélgica la tutela sobre Ruanda-Urundi.
- 1948 Primera misión del Consejo de tutela de la ONU.
- 1952 Introducción del principio electivo en el sistema político «indígena».
- 1961 Elecciones legislativas; victoria de Parmehutu; monarquía abolida por referéndum; G. Kayibanda presidente de la República.
- 1962 Independencia.
- 1963 Ataque de exiliados tutsi, los *inyenzi*; son asesinados 10.00 a 14.000 tutsi.
- 1965 Parmehutu: partido único de hecho.
- 1973 Golpe de Estado: el general Juvénal Habyarimana toma el poder.
- 1975 Creación del MRND, partido único.
- 1978 Nueva Constitución.

- 1988 Conferencia de refugiados ruandeses en Washington.
- 1990 Inicio de democratización. Ataque del FPR; inicio de guerra civil.
- 10.06.1991 Nueva Constitución: multipartidismo.
- 16.04.1992 Gobierno de coalición; Primer ministro de la oposición (MDR).
- 07- 1992 Inicio negociaciones de Arusha.
- 4.08.1993 Firma Acuerdo de Arusha.
- 21.10.1993 Golpe de Estado en Burundi; el primer presidente elegido, un hutu, Melchior Ndadaye asesinado por ejército tutsi; nacimiento del «hutu power».
- 6.04.1994 Atentado contra avión presidencial; muerte de Habyarimana y Ntaryamira (Pres. Burundi).
- 7.04.1994 Inicio del genocidio de los tutsi; asesinatos de opositores hutu; FPR lanza ofensiva.
- 9.04.1994 Puesta en pie del gobierno interino.
- 4 .07.1994 Victoria militar del FPR; fin genocidio tutsi.
- 8.11.1994 Creación del TPIR.
- 1996-1997 Primera guerra en Zaire-Congo.
- 1998-2003 Segunda guerra Congo.
- 2002 Inicio jurisdicciones Gacaca.
- 2012 Fin Gacaca.
- 2015 Fin TPIR.

# Bibliografía

- Amselle Jean-Loup et M'Bokolo Elikia (dir), *Au coeur de l'ethnie. Ethenies, tribalisme et état en Afrique*, Paris La Découverte, 1985.
- Chrétien Jean-Pierre et alii, *Rwanda. Les médias du génocide*, Paris, Karthala, 1995.
- Chrétien Jean-Pierre, *L'Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d'histoire*. Paris, Aubier, Collection historique, 2000.
- Cruvellier Thierry, *Le Tribunal des vaincus. Un Nuremberg pour le Rwanda?*, Paris, Calmann-Lévy, 2006.
- Des Forges Alison, *Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda*, Paris, Karthala, 1999.
- Fujii Lee Ann, *Killing Neighbors. Webs of Violence in Rwanda*, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2009.
- Guichaoua André, *Rwanda, de la guerre au génocide. Les politiques criminelles au Rwanda (1990-1994)*, Paris La Découverte, 2010.
- Kimonyio Jean-Paul, *Rwanda, un génocide populaire*, Paris, Karthala, 2008.
- Janot Olivier, *La France au Rwanda (1990-1994). Entre abstention impossible et engagement ambivalent*, Bruxelles, Peter Lang, 2007.
- Lemarchand René, *Rwanda and Burundi*, Londres, Pall Mall Press, 1970.
- Newbury Catharine, *The cohesion of oppression. Clientship and ethnicity in Rwanda, 1860-1960*. New York, Columbia University Press, 1988.
- Prunier Gérard, *Rwanda 1959-1996, Histoire d'un génocide*, Paris, Édition Dargorno, 1997.
- Reyntjens Filip, *L'Afrique des Grands Lacs en crise, Rwanda, Burundi, 1988-1994*, Paris, Karthala, 1994.
- Reyntjens Filip, *Rwanda, trois jours qui ont fait basculer l'histoire*, Paris, L'Harmattan, 1995, « Cahiers Africains », n.º 16.
- Reyntjens Filip, *Rwanda, Gouverner après le génocide*, Paris Les Belles Lettres, 2014.
- Straus Scott, *The Order of genocide. Race, power, and war in Rwanda*, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2006.
- Vansina Jean, *Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya*, Paris Karthala, 2011.
- Vidal Claudine, « Enquêtes au Rwanda. Questions de recherche sur le génocide tutsi », *Revue Agone*, n.º 53, 2014, p. 103-142.

# Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 91

El exterminio de los tutsi ruandeses es calificado comúnmente como «el último genocidio del siglo xx», tras el que resonó con fuerza y claridad el grito: «¡Nunca más!». El genocidio de 1994 ha sido excepcional por su envergadura, rapidez y por su modo operatorio: más de medio millón de personas exterminadas en cien días, matadas generalmente por medio de armas rudimentarias utilizadas por un gran número de autores del crimen. Según las estadísticas de la justicia ruandesa, la relación autor-víctima es de en torno a dos por uno, lo que justifica la designación de «genocidio popular».

El presente ensayo trata de captar los resortes de esta tragedia. Una amplia parte está consagrada a los antecedentes, lejanos y más inmediatos, indispensables para comprender las dinámicas que se pusieron en práctica. El análisis no concluye en el momento del fin del genocidio, sino que aborda igualmente sus secuelas. La tragedia de 1994, en efecto, no es el fin de esta historia, ya que, por muy grave que pueda parecer, solo constituye una etapa de la misma. Sigue presente en la región de los Grandes Lagos y muy especialmente en Ruanda, donde uno vuelve a encontrar la violencia estructural que había precedido al genocidio y que podría, en el futuro, transformarse nuevamente en violencia aguda.

**Filip Reyntjens**, nacido el 14 de junio de 1952, es un constitucionalista y politólogo belga, profesor de derecho y ciencias políticas en la Universidad de Amberes. Es especialista en el África subsahariana, en particular en Ruanda, el primer país en el que trabajó y al que sigue dedicando gran parte de sus publicaciones. Sus investigaciones se centran principalmente en el derecho constitucional, las políticas de desarrollo y la historia de la región de los Grandes Lagos de África.



**Deusto**  
Publicaciones  
Universidad de Deusto



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**LEHENDAKARITZA**  
Giza Eskubide, Eskubizitza  
eta Lan-kidetzaren Idazkaritza Nagusia  
Baktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

**PRESIDENCIA**  
Secretaría General de Derechos Humanos,  
Convivencia y Cooperación  
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos